

INFORME ESPECIAL

FRAGMENTACIÓN Y POLARIZACIÓN A UN AÑO DE LA PRÓXIMA PRESIDENCIA

AGOSTO 2025



RESUMEN EJECUTIVO:	4
INTRODUCCIÓN:	5
METODOLOGÍA:	7
SECCIÓN 1: CUESTIONES CLAVE	8
UN CONGRESO FRACTURADO	8
UNA SITUACIÓN DE SEGURIDAD DIFÍCIL	10
POLÍTICA EXTERIOR: LAS RELACIONES DE COLOMBIA CON PAÍSES CLAVE	14
UNA CRISIS FISCAL INMINENTE	16
POTENCIAL ESCASEZ DE GAS Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA	18
CORRUPCIÓN	19
REFORMAS SOCIALES E INCLUSIÓN	20
SECCIÓN 2: CANDIDATOS PRESIDENCIALES	22
CANDIDATOS POTENCIALES:	24
LOS CANDIDATOS DE LA IZQUIERDA:	24
GUSTAVO BOLÍVAR	26
MARÍA JOSÉ PIZARRO	27
ROY BARRERAS	28
LOS CANDIDATOS DEL CENTRO:	29
SERGIO FAJARDO	30
CLAUDIA LÓPEZ	31
JUAN MANUEL GALÁN	32
LOS CANDIDATOS DE LA DERECHA:	33
VICTORIA DÁVILA	34
MARÍA FERNANDA CABAL	35
MAURICIO CÁRDENAS	36
ENFOQUE: EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONTIENDA ELECTORAL	38
¿CÓMO PARTICIPARÁ EL SECTOR PRIVADO EN ESTE CICLO ELECTORAL?	38
SECCIÓN 3: ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS?	39
QUÉ ESPERAR DE UNA PRESIDENCIA DE IZQUIERDA:	40
OBSTÁCULOS	40
QUÉ ESPERAR DE UNA PRESIDENCIA DE CENTRO:	41
OBSTÁCULOS	41
QUÉ ESPERAR DE UNA PRESIDENCIA DE DERECHA:	42
OBSTÁCULOS	43
SECCIÓN 4: PRONÓSTICOS ELECTORALES	43
EN CASO DE UNA VICTORIA DE IZQUIERDA	46
EN CASO DE LA DERROTA DE LA IZQUIERDA	46
CONCLUSIÓN:	47



INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA:

Isabel Hawes

EDICIÓN GENERAL:

Sergio Guzmán, Daniel Poveda

DESIGN:

Angelica Castillo

Este documento fue originalmente redactado en inglés y traducido al español.
Si encuentra alguna imprecisión, por favor consulte la versión original en inglés.

RESUMEN EJECUTIVO:

A un año de que el próximo presidente de Colombia asuma el cargo, el 7 de agosto de 2026, este informe ofrece una visión general de alto nivel sobre lo que puede esperarse durante la carrera presidencial, quiénes son los candidatos y qué retos deberá afrontar el próximo Gobierno cuando llegue al poder. Los lectores conocerán las políticas de los candidatos, sus equipos, alianzas potenciales, y los temas clave que marcarán la agenda en 2026. Aunque todo indica que la contienda presidencial ya comenzó, la carrera apenas empieza.

La contienda electoral de 2026 probablemente estará marcada por la incertidumbre, polarización y una retórica incendiaria entre candidatos y partidos. Con 75 aspirantes presidenciales hasta la fecha y un número creciente de movimientos políticos, la contienda se perfila como saturada y profundamente fragmentada. Aunque es poco probable que la suspensión de las encuestas de intención de voto hasta el 31 de octubre de 2025 tenga un impacto directo en el resultado electoral en esta etapa de la contienda presidencial, sí plantea preocupaciones sobre una potencial proliferación de desinformación y restringe el acceso a información clave para todos los actores involucrados, incluyendo votantes, diplomáticos y mercados.

Independientemente del resultado electoral, todos los candidatos deberán enfrentar la cruda realidad del país: desacuerdos y fragmentación en el Congreso, partidos políticos débiles, el deterioro de la seguridad urbana y rural en medio de un mayor escepticismo sobre las soluciones negociadas, un déficit fiscal creciente y finanzas públicas debilitadas, una clase política percibida como corrupta y estancada, promesas incumplidas de igualdad social y reformas y una profunda incertidumbre sobre la posición de Colombia en el escenario internacional. Estas cuestiones han limitado significativamente la capacidad del presidente Petro para gobernar con eficacia y es probable que también dificulten el mandato de su sucesor. A medida que el Gobierno pasa de gobernar a hacer campaña (algo que, según los miembros de la oposición, nunca ocurrió antes), es probable que la polarización se profundice y el país se vuelva aún más difícil de gobernar. Esto sugiere que quizá sea demasiado pronto para dar por concluida la Administración del presidente Petro y enfocarse en la próxima.

El espectro político colombiano está plagado de fragmentación y agitación. Bajo el mandato del presidente Petro, la izquierda colombiana se ha consolidado en gran medida bajo la coalición del Pacto Histórico, con el propio Gustavo Petro como figura central de la identidad y la dirección del movimiento. Sin embargo, tanto el Pacto Histórico como la izquierda en general enfrentan divisiones y desacuerdos. En los partidos de centro, el número de candidatos es elevado y, aunque se están formando coaliciones en torno a las elecciones legislativas, la falta de unidad para las presidenciales reducirá las probabilidades de consolidar apoyo en primera vuelta. El centro se encuentra atrapado entre la retórica antipetrista que domina la derecha y el discurso de «bloqueo institucional» impulsado por la izquierda. En este contexto, los candidatos de centro enfrentarán dificultades para atraer el respaldo de los votantes ubicados en los extremos del espectro político si no logran ampliar su mensaje más allá de la posición tradicional sobre la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo, la derecha colombiana permanece fragmentada y sin un candidato claro: figuras independientes como Victoria Dávila amenazan con restarle apoyo al Centro Democrático, en un contexto de pérdida de influencia de los partidos tradicionales como el Conservador, el Liberal y el Partido de la U.

Aunque algunos observadores externos se inclinan por un potencial giro de la presidencia colombiana hacia la derecha, insistimos en que, por ahora, el resultado electoral sigue abierto. Todas las partes tienen caminos potenciales para ganar, como analizamos en nuestra reciente serie «Si quiere ganar». Dicho esto, aunque la



oposición tiene ventaja frente a un Gobierno moderadamente popular y afectado por los problemas anteriormente mencionados, su actual fragmentación limita su capacidad para asegurar una victoria contundente.

Anticipamos que la transición hacia el próximo Gobierno será tensa y complicada. En el caso de una derrota de la izquierda, es cada vez más probable que el presidente Petro cuestione los resultados electorales, especialmente si es por un margen estrecho, y que movilice a sus seguidores contra las instituciones en un intento de replicar la dinámica de las protestas sociales de 2021. Por otra parte, es muy probable que una victoria de la izquierda provoque protestas de la oposición, una disminución en las expectativas de crecimiento económico y de inversión extranjera directa, así como enfrentamientos persistentes entre el Ejecutivo y la clase política. Independientemente del resultado, no anticipamos que se produzcan hechos que comprometan la estabilidad institucional o derroquen a un Gobierno elegido democráticamente, dada [la fortaleza de las instituciones de Colombia](#) y [la subordinación del Ejército al poder civil](#).

A un año de la posesión del próximo Gobierno, la contienda presidencial de 2026 apenas está empezando a cobrar impulso. Tres fechas clave marcarán el calendario electoral: las elecciones internas de los partidos en octubre de 2025, la presentación de las listas al Congreso el 8 de diciembre de 2025 y las elecciones legislativas y referendos interpartidistas el 8 de marzo de 2026.

El ritmo acelerado de los acontecimientos destaca la necesidad de contar con información confiable, oportuna y con visión estratégica en un entorno saturado de desinformación. **Invitamos a los lectores a suscribirse al Colombia Risk Monthly para anticipar las tendencias que definirán la agenda política, económica, social y de seguridad durante el próximo período electoral y más allá.**

INTRODUCCIÓN:

La campaña electoral de 2026 en Colombia se desarrolla en un contexto de alta tensión y crecientes preocupaciones en materia de seguridad. El número de candidatos es elevado: hasta la fecha, hay [42 candidatos](#) inscritos oficialmente como independientes en la Registraduría Nacional del Estado Civil, de un total de [75 candidatos](#) posibles. Al momento de redactar este informe, ningún bando parece contar con un candidato definido, evidenciando una contienda electoral fragmentada y marcada por la incertidumbre. Al mismo tiempo, Colombia se enfrenta a múltiples crisis que se intensifican, entre ellas el deterioro de la [seguridad](#), el creciente [déficit fiscal](#), [la inminente escasez de gas](#), el colapso [del sistema de salud](#) y el [progresivo deterioro](#) de las relaciones con su principal socio comercial y militar, Estados Unidos. Estos desafíos requieren un liderazgo claro y efectivo para evitar un mayor deterioro. Como resultado, probablemente se convertirán en ejes centrales de la campaña electoral para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en el periodo 2026-2030.

El presidente Petro llegó al poder en 2022 con algo más del [50 %](#) de los votos y con el respaldo legislativo de los [partidos Conservador, Liberal y Partido de la U](#), además de la coalición del Pacto Histórico. Sin embargo, el fracaso del Gobierno Petro en lograr el cambio social [prometido](#) durante la campaña ha generado una profunda desilusión entre los votantes que, sin formar parte de su base electoral, fueron clave para su victoria en 2022. Al mismo tiempo, la situación ha generado una creciente frustración por parte del presidente, llevándolo cada vez



más a buscar la aprobación de sus reformas mediante decretos ejecutivos ante su debilitada capacidad de negociación con el Congreso. Hasta ahora, el inicio de la contienda electoral se ha caracterizado por una retórica tensa y acusatoria tanto dentro del Gobierno como entre los candidatos, una dinámica que probablemente persistirá a lo largo de todo el proceso electoral.

La influencia del presidente Petro sobre el discurso político, el ciclo de noticias nacionales y las narrativas dominantes limitan el surgimiento de cuestiones alternativas, reduciendo la contienda electoral a un referendo sobre su gestión y su figura como actor histórico central. En este entorno polarizado y personalista, se ha prestado menos atención a la consolidación de proyectos partidistas coherentes y cohesionados y a la elaboración de listas para el Senado compuestas por perfiles técnicos y experimentados, aspectos clave para la gobernabilidad democrática de Colombia y la sostenibilidad de cualquier proyecto político. En cambio, el clima político actual tiende a dividir a la población en función de su lealtad u oposición a una figura política central, o bien de su capacidad para configurar mayorías en el Congreso mediante su participación en decisiones burocráticas y presupuestarias.

Este informe se publica en las primeras etapas de la contienda electoral, antes del inicio de la época de [campaña](#), que se extiende del 31 de enero al [30 de mayo de 2026](#), y un año antes de la salida de Petro del poder. Por ahora, las encuestas son indicadores poco confiables de la intención de voto, dada la alta proporción de votantes indecisos. Además, una [ley aprobada](#) recientemente [prohíbe](#) las encuestas electorales hasta el 31 de octubre de 2025, lo que probablemente incrementará la incertidumbre en la población y probablemente influirá en las estrategias de los aspirantes presidenciales. Como consecuencia de la ley, es probable que proliferen las encuestas no oficiales, con un rigor metodológico cuestionable, fuentes de financiamiento opacas y resultados difíciles de verificar. Este escenario debilitará la producción de datos confiables que ayuden a comprender la evolución de la dinámica electoral y probablemente ampliará el margen para la desinformación.

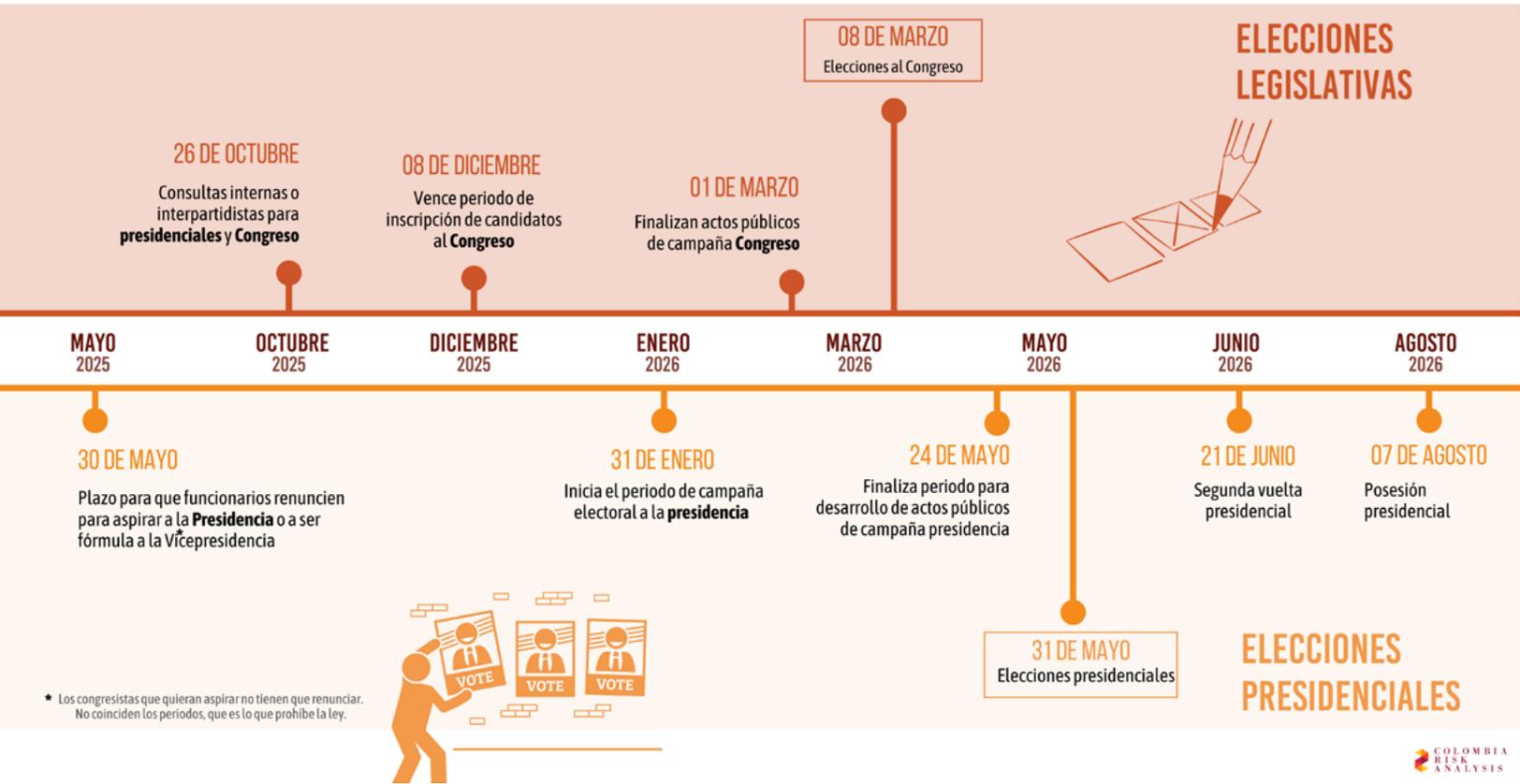
Con la apertura del periodo de [inscripción de candidatos](#) en mayo de 2025, es probable que aumente el número de postulaciones independientes o avaladas por partidos políticos antes de la fecha límite del 31 de enero de 2026. Las coaliciones aún están en formación y muchos aspirantes no han tenido la oportunidad de lanzar campañas visibles, lo que por ahora favorece a quienes ya cuentan con reconocimiento nacional. A su vez, las encuestas tienen una capacidad limitada para predecir con precisión los resultados electorales, ya que los [sesgos de atractivo social](#) tienden a ocultar las preferencias hacia figuras controvertidas. Este fenómeno se acentúa en contextos polarizados, como probablemente demostrarán las elecciones de 2026. En votaciones pasadas, como en [2022](#) con el [auge](#) de Rodolfo Hernández y en el referéndum de paz de [2016](#), se ha demostrado que las encuestas no logran predecir con precisión las intenciones de voto de los colombianos. En este sentido, es probable que el próximo presidente aún no forme parte del panorama electoral. Nuestras fuentes consideran que el candidato con más opciones de ganar surgirá entre cinco y seis meses antes de la primera vuelta, como ocurrió con Iván Duque en [2018](#).

Este informe analizará, en primer lugar, los principales desafíos que enfrenta Colombia y que el próximo Gobierno deberá abordar. En segundo lugar, examinará a los potenciales candidatos presidenciales, sus principales propuestas políticas, equipos y alianzas, así como otras variables relevantes. En tercer lugar, ofrecerá una evaluación preliminar de los primeros 100 días del Gobierno entrante, identificando las decisiones clave y obstáculos que probablemente enfrentará una Administración de izquierda, centro o derecha. Por último, el informe presentará una proyección electoral inicial para las elecciones presidenciales de 2026.

La ausencia de encuestas, la polarización del electorado y las implicaciones cruciales de las elecciones para el futuro económico y político del país sugieren que ahora, más que nunca, es esencial seguir de cerca la evolución de la contienda electoral. El equipo de Colombia Risk Analysis espera que el análisis y las proyecciones contenidas en este informe ayuden a formuladores de política, inversionistas y actores diplomáticos a entender mejor el entorno político actual de Colombia y a tomar decisiones informadas antes de las elecciones y con miras a la próxima Administración.



CALENDARIO ELECTORAL



METODOLOGÍA:

Para la elaboración de este informe, realizamos 20 entrevistas bajo acuerdo de no atribución con fuentes de diversos sectores, incluyendo el Gobierno, el ámbito académico, periodistas, politólogos y representantes de organizaciones de análisis de riesgo político.

Además, el desarrollo del informe incluyó el análisis de fuentes secundarias, como artículos periodísticos, revistas académicas e informes, y se basó en la experiencia y publicaciones previas de Colombia Risk Analysis. Agradecemos a los entrevistados por su tiempo y valiosos aportes.



SECCIÓN 1: CUESTIONES CLAVE

En la actualidad, Colombia enfrenta varios retos que probablemente dominarán la próxima contienda electoral y que el Gobierno entrante deberá abordar. Más allá de la creciente inseguridad y el riesgo de una crisis fiscal, el país se enfrenta a un Congreso fragmentado, relaciones exteriores tensas, corrupción persistente, escasez de gas, estancamiento en las conversaciones de paz y expectativas desproporcionadas de reformas sociales. Según las [últimas encuestas](#), lo que más preocupa a los colombianos es el acceso a la salud, seguido de cerca por la inseguridad, la corrupción, el coste de la vida y la [situación política nacional y mala gobernanza](#). La evolución de estos temas durante el próximo año, así como la respuesta de los candidatos en sus discursos o en su gestión, probablemente influirán en su popularidad y en la percepción pública sobre su idoneidad para gobernar.

UN CONGRESO FRACTURADO

Es muy probable que el próximo presidente enfrente un Congreso dividido y polarizado, así como a otros órganos del Estado y entidades gubernamentales independientes que desconfían del Ejecutivo, como el Banco de la República. Anteriormente, la coalición gobernante del presidente Petro, el Pacto Histórico, no logró la [mayoría en el Congreso en las elecciones de 2022](#), lo que obligó al presidente a formar una [coalición multipartidista](#) con los partidos tradicionales de Colombia. Esta coalición, que incluía al Partido Conservador, Alianza Verde, el Partido de la U y el Partido Liberal, permitió la [aprobación de una reforma fiscal](#) a principios de 2023 pero carecía de [coherencia ideológica](#). La ruptura de esta coalición comenzó a principios de 2023 con la salida de los partidos Conservador y de la U en respuesta a una controvertida [reforma](#) del gabinete presidencial en medio de [desacuerdos sobre la reforma a la salud](#). La ruptura de la coalición [redujo significativamente la eficacia](#) de la Administración del presidente Petro y agravó la polarización tanto dentro del Congreso como entre las ramas del poder Ejecutivo y Legislativo.

El Gobierno Petro ha sido testigo del aumento de la división dentro de los partidos de la oposición, que en parte puede atribuirse a desacuerdos internos sobre el apoyo al Gobierno. Sin embargo, [la fragmentación](#) no es un fenómeno nuevo en la política colombiana. La influencia de los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, ha ido [disminuyendo](#) desde la Constitución de 1991 y la apertura del sistema político a nuevos partidos. A su vez, el [voto preferencial](#), un mecanismo común en los partidos colombianos, fomenta su fragmentación y la competencia interna entre sus miembros, ya que promueve el individualismo por encima de la identidad partidaria.

El Partido Conservador ha enfrentado una crisis de liderazgo e identidad debido al surgimiento de nuevas fuerzas políticas de derecha, entre ellas [el uribismo](#), un movimiento inspirado en las ideas del expresidente Álvaro Uribe, y el [Centro Democrático](#), el partido que fundó y que ganó la presidencia con Iván Duque en 2018. La incapacidad de mantener un [programa ideológico claro](#) ha llevado a los miembros del partido a votar de manera divergente en proyectos de ley claves. En las últimas elecciones, el Partido Conservador no ha logrado presentar candidatos convincentes, y sus dirigentes han optado por [apoyar a candidatos externos](#), como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y, más recientemente, Iván Duque, lo que ha provocado nuevas divisiones.

Por otro lado, las [tensiones internas](#) dentro del Partido Liberal se han visto agravadas por las acusaciones de fraude contra el líder del partido, el expresidente César Gaviria, y las críticas a su [permanencia en el cargo](#). Pese a que inicialmente hizo parte de la coalición del presidente Petro, los miembros del Partido Liberal muchas veces



[votaron en contra](#) de proyectos claves del Ejecutivo. En enero del 2025, el partido declaró su [independencia del Gobierno Petro](#), reduciendo significativamente la mayoría legislativa del presidente, dado que el Partido Liberal tenía casi el 20 % de los escaños en el Senado. Sin embargo, no todos los miembros del partido [apoyaron](#) la decisión de separarse de la coalición gobernante, dejando en evidencia las divisiones ideológicas al interior del partido y la continua influencia del presidente Petro sobre una facción del mismo.

El partido centrista Alianza Verde actualmente se encuentra en una situación de incertidumbre ante una potencial división. Si bien los [escándalos de corrupción](#) aceleraron su deterioro, este ya sufría de [una fragmentación](#) en torno al respaldo a la agenda del presidente Petro y su afinidad con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, ambos aspirantes a la presidencia.

En contraste, la creación del Pacto Histórico, su consolidación como coalición de Gobierno en el Congreso y su potencial transformación en [partido político](#) han reunido firmemente a la izquierda colombiana bajo el ala del presidente Petro. La coalición incluía inicialmente a Colombia Humana, el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, MAIS, Soy Porque Somos y Todos Somos Colombia, así como a diversos movimientos afrocolombianos e indígenas. Aunque existen actores de izquierda fuera del Pacto Histórico, y partidos como MAIS y Todos Somos Colombia se han retirado de la coalición o han perdido su personería jurídica, la izquierda colombiana sigue asociada firmemente al presidente Petro y al Pacto Histórico en los medios de comunicación y a los ojos de la oposición y el electorado, reduciendo significativamente el pluralismo y el debate en la izquierda política. Aunque el presidente Petro ya no es el único candidato del movimiento, como lo era en 2022, sigue siendo una figura decisiva de [la identidad y del rumbo de la coalición](#).

Los cambios en la composición del Congreso en 2022 también favorecieron su apoyo al presidente Petro. Los 16 representantes de las [Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz](#) (CITREP), elegidos por [primera vez en 2022](#) para la Cámara de Representantes, han votado principalmente a favor de la agenda del presidente Petro, otorgándole al Gobierno un mayor margen de votos en la Cámara de Representantes que en Senado. Por esa razón, el presidente Petro ha optado por radicar sus principales proyectos en la Cámara. Sin embargo, es poco probable que estos escaños respalden propuestas de un potencial Gobierno de derecha, lo que probablemente obligará a ese sector a enfocar su estrategia legislativa en el Senado. No obstante, las elecciones de 2026 supondrán otro cambio en la composición del Congreso, puesto que durante el mandato de Petro se [eliminaron los 10 escaños legislativos](#) garantizados al Partido Comunes en cumplimiento del Acuerdo de paz de 2016. Esta modificación implica que, por primera vez, el antiguo partido de las FARC tendrá que competir por los escaños en igualdad de condiciones en las próximas elecciones. Es altamente improbable que el Partido Comunes consiga mantener todos sus escaños anteriores, lo que supondría una pérdida de apoyo para las propuestas de izquierda (o de oposición a las de derecha) en el próximo Gobierno.

La fractura del Congreso y posterior incapacidad del Gobierno para alcanzar consensos y aprobar reformas han llevado al presidente Petro a intentar gobernar por medio de decretos ejecutivos. A principios de junio de 2025, surgieron temores de una [crisis](#) institucional luego de que el presidente Petro convocara una Consulta popular sobre la reforma laboral por decreto ejecutivo, tras ser [archivada la propuesta](#) en el Congreso el 14 de mayo de 2025. Posteriormente, el 18 de junio de 2025, el Consejo de Estado [suspendió el decreto](#), que fue denunciado como [inconstitucional](#) por senadores de la oposición y destacadas [ONG](#). Sin embargo, la Consulta popular contó con un importante [apoyo popular](#), parte del cual probablemente se trasladará a la nueva convocatoria para una [asamblea constituyente](#) propuesta por el presidente Petro, que planea celebrar junto con las elecciones legislativas de [marzo de 2026](#); no obstante, es poco probable que se materialice. Esta secuencia de acontecimientos ha llevado al deterioro de las relaciones entre los grupos del Congreso y el Ejecutivo.

¿Por qué es importante?

La fragmentación de los partidos políticos desestabiliza la contienda electoral, aumentando la probabilidad de que surjan nuevas coaliciones o candidaturas independientes y dejando un panorama político aún más incierto. Las divisiones ideológicas



dentro de los partidos fomentan la deserción o el cambio de postura por parte de sus miembros, debilitando la identidad partidaria y generando confusión entre los votantes respecto a las posiciones de un partido o de los políticos. A medida que los partidos se fragmentan aún más, la formación de una coalición mayoritaria exige incluir un número creciente de agrupaciones, lo que eleva el riesgo de desacuerdos y, en consecuencia, de rupturas internas. Además, para lograr acuerdos, los partidos se ven forzados a ceder en materia de coherencia ideológica, como ocurre con la coalición centrista Ahora Colombia, que se analiza más adelante en el informe, aumentando el riesgo de deserciones y una pérdida de respaldo electoral. En este contexto, el clima de polarización y tensión constante seguirá dificultando la aprobación de reformas, y anticipamos que esta situación continuará durante el próximo mandato.

Es probable que el próximo Gobierno tenga que formar una coalición multipartidista para lograr una mayoría operativa, lo que supone un reto teniendo en cuenta el deterioro de las relaciones interpartidistas en el Congreso. El reciente informe de Colombia Risk Analysis, «[¿Cuál es el futuro de la democracia en Colombia?](#)», explica que, en cierta medida, las tensiones entre los poderes del Estado son inherentes a un sistema democrático de pesos y contrapesos. Sin embargo, [el discurso](#) del presidente Petro sobre el «bloqueo institucional» a sus reformas alimenta la ya escasa confianza de la ciudadanía en las instituciones, en particular en el Congreso. La falta de confianza en las instituciones dificulta la gobernanza eficaz y debilita la confianza del sector privado para invertir en el país. Además, una asamblea constituyente o una consulta popular suponen una [carga financiera](#) significativa en medio de una crisis fiscal inminente. Restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas de Colombia y garantizar su independencia serán cuestiones fundamentales para el próximo Gobierno, así como para todos los poderes del Estado.

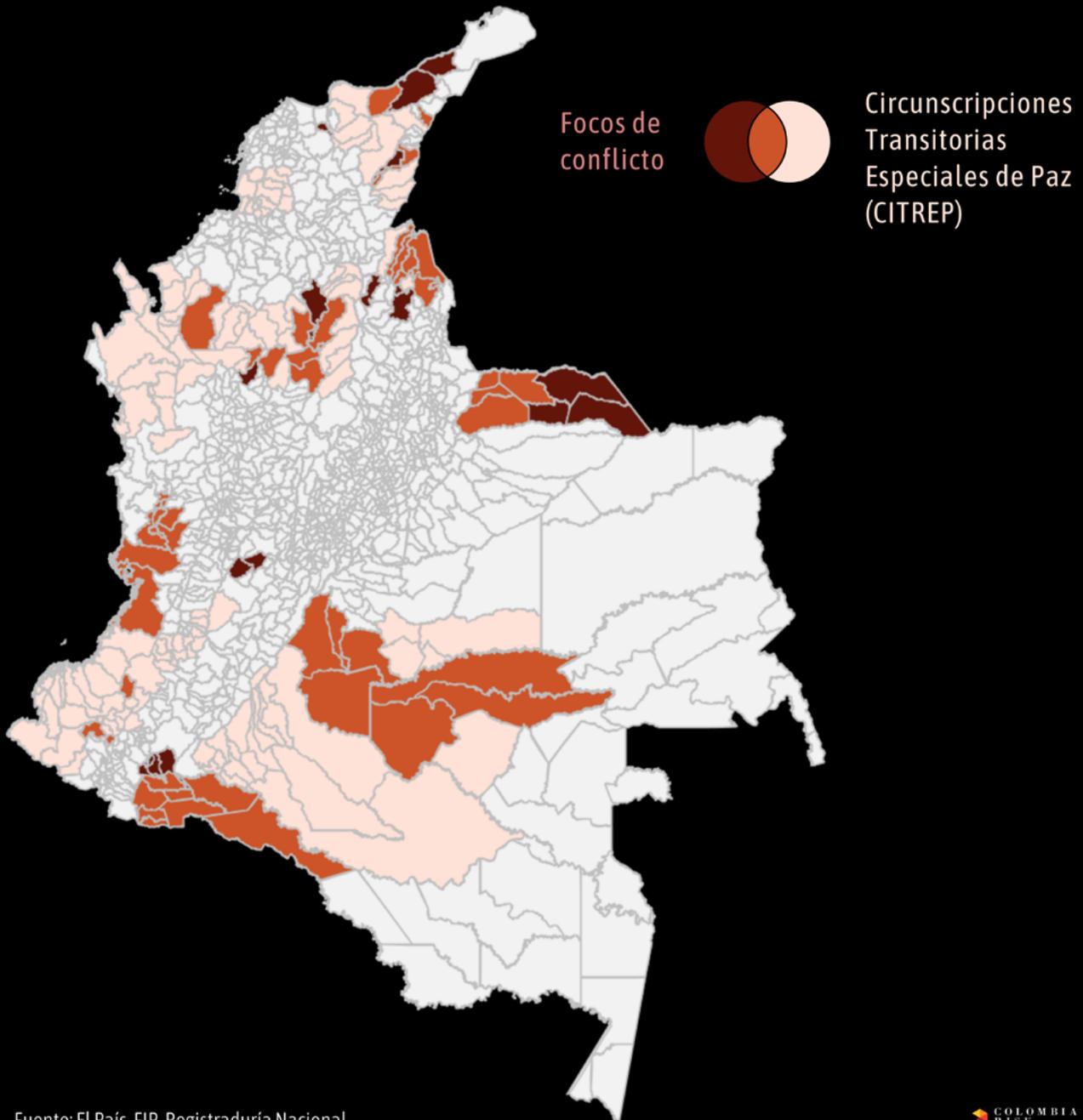
UNA SITUACIÓN DE SEGURIDAD DIFÍCIL

Es probable que una respuesta eficaz a la inseguridad se convierta en una de las principales prioridades del próximo presidente de Colombia. Durante los tres primeros años del Gobierno Petro, los grupos criminales han expandido su [control territorial](#), poniendo en entredicho la viabilidad de su política de paz total. En el primer semestre de 2025, la violencia aumentó un [45 %](#) en comparación con el mismo periodo de 2024. Aunque los actos violentos han sido menos letales, se han dirigido cada vez más [contra la población civil](#), mediante extorsiones, secuestros con fines extorsivos y el reclutamiento forzado de menores. La paz total se fundamenta en la idea de que el diálogo simultáneo con todos los grupos armados evitaría [los vacíos](#) de poder. Sin embargo, ofrecer concesiones y declarar ceses al fuego sin contar con una presencia militar suficiente [permitió](#) que estos grupos consolidaran su poder y agravaran los enfrentamientos entre ellos.

Adicionalmente, la creación de conversaciones sociojurídicas, una forma de eludir la [ley que impide negociar con grupos no reconocidos](#) como actores políticos por el Estado, motivó a los grupos criminales a organizarse, [consolidar sus estructuras y controlar a la población civil](#) con el objetivo de fortalecer su posición de negociación y acceder a los diálogos. Los enfrentamientos entre grupos armados desencadenaron brotes de violencia, como los ocurridos en [Catumbo en enero de 2025](#), que provocaron la [peor crisis humanitaria](#) de Colombia desde la [firma del acuerdo de paz](#) y llevaron al presidente Petro a [suspender las conversaciones con el ELN](#). En mayo de 2025, el presidente Petro nombró a un exmilitar para el cargo de [ministro de Defensa](#), un cargo tradicionalmente reservado para civiles, en una decisión que ni siquiera habían tomado los gobiernos de derecha anteriores. Tras una serie de ataques del ELN a [finales de junio](#), el Gobierno dio por terminadas oficialmente las negociaciones con ese grupo y desplegó 16.000 soldados en las regiones afectadas, evidenciando un giro hacia una postura más dura en materia de paz.



¿CÓMO EL CONFLICTO AFECTA LAS ELECCIONES AL CONGRESO?



Fuente: El País, FIP, Registraduría Nacional

COLOMBIA
RISK
ANALYSIS



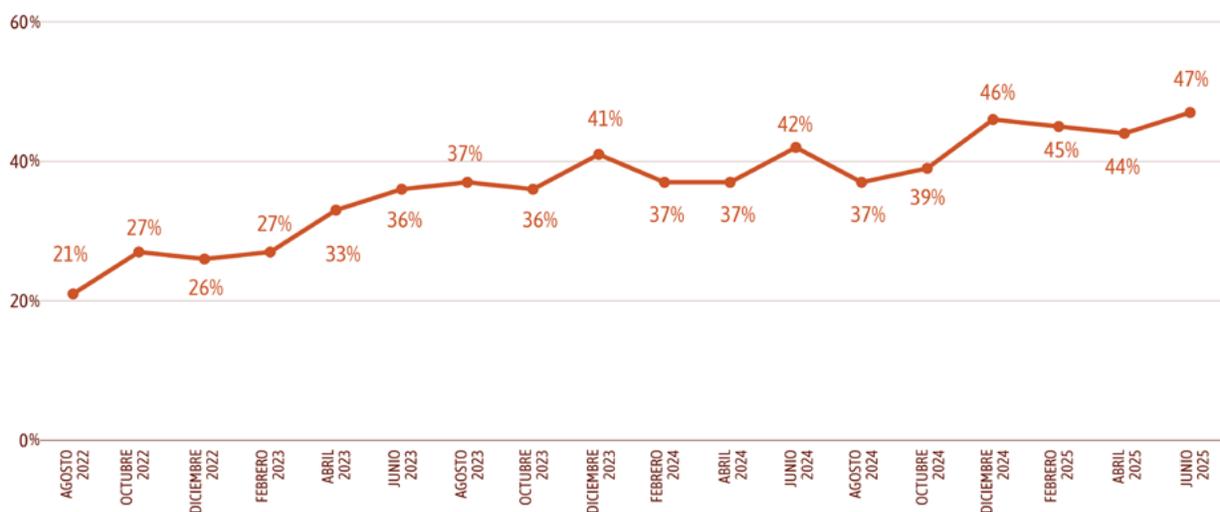
La política de paz total no ha logrado adaptarse a la [naturaleza cambiante](#) de la violencia y los grupos criminales en Colombia. En los últimos tres años, los índices de violencia urbana se han triplicado y los grupos criminales han ampliado sus redes de extorsión y tráfico de drogas a las ciudades. Solo en 2024, los casos de extorsión aumentaron un [300 %](#). Además, muchos de estos grupos criminales han [diversificado sus actividades](#) más allá de la producción de coca, obteniendo beneficios de la minería de oro, la trata de personas y la ganadería. El aumento de la violencia en las zonas fronterizas con Ecuador y [Venezuela](#) ilustra el [carácter transnacional](#) de estos mercados ilícitos. En consecuencia, una aproximación a la paz y la seguridad basado en la erradicación de la coca dentro de las fronteras de Colombia resulta insuficiente.

¿Por qué es importante?

Como se pronosticó en nuestro informe sobre el «[Futuro de las relaciones entre los poderes civil y militar](#)» en Colombia, es probable que la seguridad sea un tema central de las elecciones de 2026. En este contexto, es probable que la oposición recurra al populismo en materia de seguridad, con el objetivo de captar el respaldo de una ciudadanía cada vez más desilusionada por el fracaso de la paz total y preocupada por el aumento de la violencia, con la promesa de una mayor inversión en las fuerzas armadas y un enfoque de seguridad más duro.

El apoyo a la política de paz total ha [disminuido](#): el 72 % de los encuestados en junio de 2025 considera que la política está fracasando, dejando en evidencia la desilusión con el enfoque de la Administración Petro en materia de paz y seguridad. Es probable que el aumento de la violencia en las zonas urbanas erosione en cierta medida la base de apoyo del presidente Petro, quien en 2018 ganó en las ciudades principales de Colombia, como Cali, Medellín y Barranquilla. Adicionalmente, el respaldo popular al diálogo ha [disminuido](#) considerablemente. El porcentaje de personas que consideran que el Gobierno debería abandonar el diálogo y, en su lugar, intentar derrotar militarmente a los grupos armados se ha más que duplicado, pasando del [21 % al 47 %](#) entre agosto de 2022 y abril de 2025, la cifra más alta registrada desde 2011, al inicio del primer mandato del presidente Santos. Esto sugiere que una proporción creciente de la población probablemente se inclinará a apoyar a candidatos que promuevan un enfoque militar, en detrimento de aquellos que defienden la continuidad de la política de paz total y el diálogo con los grupos armados. Mientras tanto, en su último año de Gobierno, es probable que el presidente Petro busque alcanzar [ceses al fuego temporales](#) con los grupos armados y acuerdos parciales con facciones menores, presentándolos como logros de su política de cara a las elecciones.

APROBACIÓN CIUDADANA AL ENFOQUE MILITAR HACIA LOS GRUPOS ARMADOS



Fuente: Encuesta Invamer Junio 2025



El fracaso de la política de paz total se debe en parte a la falta de cooperación entre el Ejército y el Ejecutivo. Como analizamos a detalle en un [informe](#) anterior, existen factores estructurales y coyunturales que dificultan una colaboración eficaz entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno del presidente Petro. Problemas específicos, como un presupuesto militar insuficiente en un contexto de presiones fiscales, la desconfianza mutua, las relaciones tensas con Estados Unidos y el papel del Ejército en zonas con escasa presencia del Estado, probablemente complicarán la aplicación de una política de seguridad eficaz por parte del próximo Gobierno. Ante el fracaso del Ejército en garantizar la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas deberán reconstruir su legitimidad social e institucional en las regiones más afectadas. También es probable que se observe una mayor participación política de los militares, especialmente en torno a la descertificación.

El [deterioro y la suspensión de las negociaciones](#) entre el Gobierno del presidente Petro y ciertos grupos armados, como [el ELN y el Clan del Golfo](#), probablemente pondrán en riesgo los esfuerzos de diálogo de administraciones futuras. Es probable que el próximo Gobierno, incluso uno de izquierda, intensifique la acción militar contra los grupos armados, con la esperanza de recuperar el control territorial o mejorar su posición en potenciales negociaciones. A corto plazo, el reinicio de las operaciones militares y el cese de diálogos probablemente aumentarán la vulnerabilidad de la población civil al incrementar la probabilidad de represalias, como ocurrió con el [Clan del Golfo en abril de 2025](#). Esto agravará las crisis humanitarias existentes al forzar el desplazamiento y [dejar a la población civil](#) en medio del fuego cruzado de los grupos armados y el Ejército.

Más allá de la amenaza física a las personas, la inseguridad tiene un impacto significativo en el crecimiento económico. En 2022, la delincuencia y la violencia le costaron directamente a Colombia COP 68 billones, equivalente al 3,64 % del PIB. A nivel local, el conflicto en las zonas rurales dificulta la inversión a mediano y largo plazo en [pequeñas industrias agrícolas](#). Al mismo tiempo, el temor al desplazamiento disuade a las personas de [invertir en activos fijos](#) y generar ahorros. El aumento de la percepción del riesgo y la expansión del control de los grupos armados, que generan condiciones inestables sobre el terreno, probablemente amenazarán inversiones estratégicas y reducirán los prospectos de atraer nuevas inversiones, incluso a nivel internacional, como se evidenció con [la mina Buriticá, de propiedad china](#), en Antioquia.

El aumento de la violencia probablemente interferirá más en las elecciones al Congreso de marzo de 2026 que en las presidenciales. La falta de garantías locales y el temor a la [violencia política](#), agravado por el reciente intento de asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe, sumados a la reducción del presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE), aumentan la probabilidad de que grupos criminales interfieran en las zonas rurales. Recomendamos a los lectores consultar nuestro [informe](#) «¿Cuál es el futuro de la democracia en Colombia?» para obtener un análisis más detallado sobre la situación del CNE y otros organismos electorales, y cómo estos retos pueden afectar la legitimidad del proceso electoral.

Las comunidades rurales seguirán siendo especialmente [vulnerables](#) a la extorsión y la compra de votos. La violencia tiende a intensificarse al [inicio](#) del calendario electoral, cuando los grupos armados intentan impedir que los candidatos se inscriban o recojan firmas. Estos grupos se están [enfocando cada vez más en figuras políticas](#): de los 128 [ataques violentos](#) registrados hasta ahora en 2025, el 44,5 % tuvieron como objetivo a líderes políticos, y el 42 % se produjo en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Los departamentos de Cauca, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca son los más expuestos, al concentrar el [42,6 %](#) de todos los ataques letales. Aunque en 2023 se cancelaron algunas elecciones regionales debido a [las amenazas](#) de violencia, finalmente no se materializaron ataques, en parte gracias al cese el fuego vigente en ese momento entre el ELN y el Gobierno. Actualmente, no hay ningún cese al fuego en vigor.

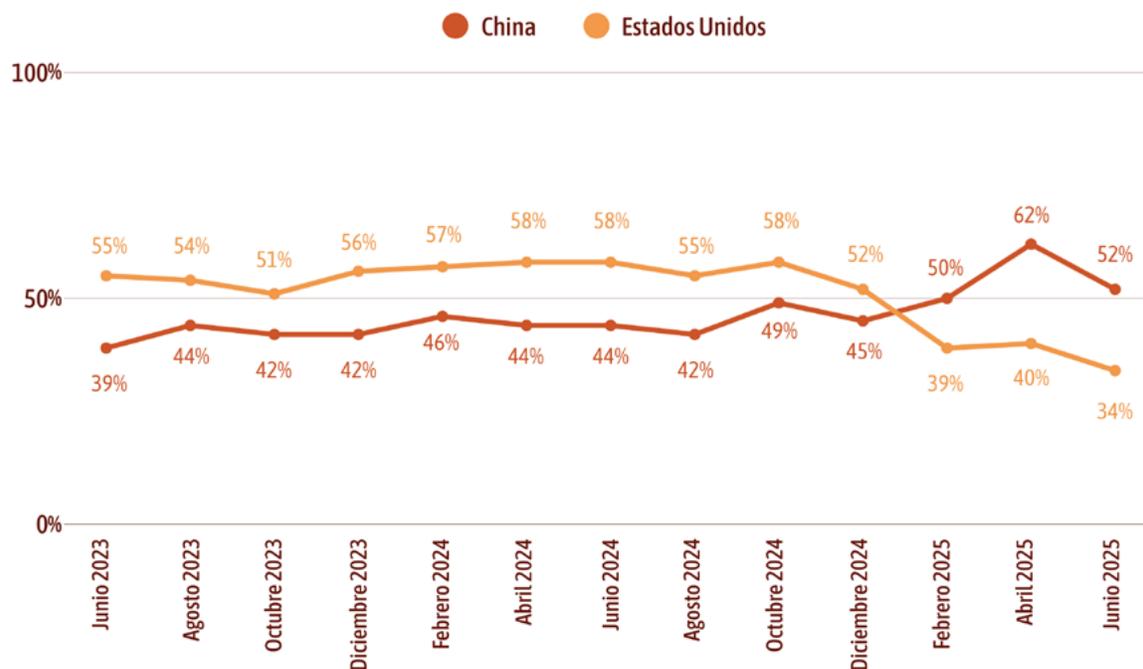


POLÍTICA EXTERIOR: LAS RELACIONES DE COLOMBIA CON PAÍSES CLAVE

A pesar de su relevancia en el contexto actual, es probable que la política exterior ocupe un lugar secundario en esta contienda electoral, ya que los candidatos se centrarán más en asuntos internos, salvo en lo relacionado con la recomposición de las relaciones con Estados Unidos. El [colapso](#) del orden internacional multilateral, en un contexto de [creciente aislacionismo](#) y [pérdida de confianza en organizaciones como la ONU](#) para [defender las normas internacionales](#), deja a Colombia especialmente vulnerable tanto a los cambios geopolíticos como a sus propios acontecimientos internos. Es especialmente preocupante el fin del respaldo internacional a los esfuerzos de fortalecimiento democrático, [que anteriormente ofrecían USAID](#) y otras organizaciones. En el caso altamente improbable, aunque no inconcebible, de un golpe de Estado, la negación de los resultados electorales o una alarmante extralimitación del Ejecutivo, habrá menos mecanismos disponibles para contener tales amenazas a la democracia colombiana.

El [enfoque de política exterior](#) de la Administración Petro, a veces [combativo](#) y otras veces ambivalente, es divisivo, lo que pone en peligro la posición internacional de Colombia y desaprovecha las oportunidades de liderazgo internacional, en particular en lo relacionado con [Venezuela](#). La postura de cada candidato frente a Estados Unidos influirá en las elecciones, y es probable que los sectores empresariales se inclinen por quien promueva una relación constructiva con Washington. Sin embargo, las últimas encuestas señalan una [caída del 40 % en la percepción positiva de Estados Unidos](#) entre los colombianos, entre enero y abril de 2025. Por tanto, un candidato que respalde firme y abiertamente a Estados Unidos sin considerar alternativas diplomáticas y comerciales con otros socios estratégicos corre el riesgo de perder respaldo popular.

APROBACIÓN DE CHINA VS. ESTADOS UNIDOS



Fuente: Encuesta Invamer Junio 2025



El enfoque de la actual Administración en materia de política exterior ha tensado las relaciones de Colombia con sus socios tradicionales y cruciales. En particular, la decisión del presidente Petro de [romper relaciones diplomáticas con Israel](#), su [reacercamiento a Venezuela](#) y [sus reuniones con China amenazan las relaciones del país con Estados Unidos](#). Estados Unidos es el [principal socio comercial y de inversión](#) de Colombia y, asimismo, Colombia es ampliamente considerado como el aliado más cercano de Estados Unidos en la región. Durante una conferencia reciente para debatir la situación en Gaza, organizada por el Gobierno colombiano a mediados de junio, el presidente Petro [sugirió](#) que Colombia debería abandonar la OTAN, de la que actualmente es socio global no miembro. Esta medida intensificaría aún más los esfuerzos de Petro por distanciarse de Estados Unidos y, en términos más amplios, de otros países occidentales.

Rompiendo con el enfoque de gobiernos anteriores, el presidente Petro ha impulsado una política exterior de «ambigüedad estratégica», buscando estrechar lazos con múltiples socios globales alternativos mientras intenta preservar las relaciones con Estados Unidos. En la [cumbre de la CELAC de mayo de 2025](#), el presidente Petro firmó la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y anunció su ingreso al Banco de Desarrollo del BRICS. Estas decisiones coinciden con [los cambios en la política exterior estadounidense](#) bajo la Administración Trump, que incluyen medidas migratorias más estrictas y nuevos aranceles, como el arancel del 50 % sobre las exportaciones de acero y aluminio [impuesto](#) el 4 de junio de 2025 y la [suspensión de financiación del Departamento de Estado](#) y de [los proyectos de consolidación de la paz](#) apoyados por la USAID por un total de USD [380 millones](#). El presidente Petro también ha tenido enfrentamientos directos con la nueva Administración estadounidense, como sucedió cuando se [negó a autorizar los vuelos de deportación](#) en enero de 2025. Más recientemente, surgieron tensiones después de que el presidente Petro [insinuara](#) que Estados Unidos estaba involucrado en un [complot golpista](#) contra él, lo que llevó a ambos países a [llamar a sus embajadores](#).

¿Por qué es importante?

Las [relaciones conflictivas](#) entre Estados Unidos y Colombia ponen en riesgo una relación comercial y de inversión que es crucial para la estabilidad económica de Colombia. La firma del memorando del BRI tiene un carácter simbólico y no garantiza oportunidades de inversión concretas para Colombia. Sin embargo, provocó una [reacción inmediata](#) de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que expresó su oposición a vincular cualquier proyecto estatal financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con China. La amenaza del presidente Trump de imponer un [arancel adicional del 10 % a cualquier país que se alinee con los BRICS](#) complica aún más las perspectivas de diversificación económica de Colombia. Dada la flexibilidad que caracteriza al BRI, es poco probable que algún candidato presidencial opte por retirarse por completo, salvo como un gesto simbólico hacia Estados Unidos. Los candidatos de derecha, como Victoria Dávila o María Fernanda Cabal, que critican abiertamente el acercamiento a China a expensas de la relación de Colombia con Estados Unidos, son más propensos a adoptar esa postura.

Además, la cooperación militar con Estados Unidos sigue siendo un pilar esencial para contener la situación de seguridad en Colombia. Por primera vez [desde 1996](#), es probable que Estados Unidos retire este año la certificación de Colombia como aliado en la lucha contra las drogas. Asimismo, es probable que en 2026 EE. UU. condicione su recertificación al cumplimiento de otros objetivos estratégicos, como el control migratorio o el distanciamiento de China. La descertificación conlleva el riesgo de un [recorte del 50 % en la ayuda bilateral](#) y de que Estados Unidos ejerza presión en foros internacionales contra el financiamiento para Colombia, lo que agravaría el déficit presupuestal en seguridad causado por los recortes a los fondos del Departamento de Estado de EE. UU.

Es probable que se concedan exenciones discrecionales para mantener la cooperación militar, pero lo más probable es que se vea comprometida la financiación de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. La descertificación también aumenta la probabilidad de que Estados Unidos [cancele](#) los visados de altos funcionarios de la Administración Petro, como ocurrió con [el presidente Samper](#) en 1996. Según reportes, esta medida ya se está aplicando; la reciente revocación de visados tras el escándalo relacionado con un presunto golpe de Estado aumenta la probabilidad de



nuevas cancelaciones, junto con el potencial de imposición de [sanciones selectivas](#) contra personas cercanas al círculo presidencial.

Si Estados Unidos retira totalmente su financiación, es probable que Colombia tenga que buscar apoyo militar de socios alternativos o retrasar la aplicación del proceso de paz debido a las restricciones fiscales. Un retraso requeriría la aprobación del Congreso, lo que es poco probable dada su actual fragmentación política. Estados Unidos debe anunciar oficialmente cualquier descertificación antes del 15 de septiembre. Una medida como esta probablemente alimentará la retórica anti-Petro y, al mismo tiempo, intensificará las percepciones desfavorables de los colombianos hacia Estados Unidos. Asimismo, es probable que le otorgue a Petro la justificación política para abandonar los esfuerzos por mantener la relación bilateral y reforzar su giro hacia alianzas alternativas y una postura confrontativa frente a la Administración Trump.

Nuestras fuentes sugieren que es probable que Estados Unidos intente presentar la descertificación como una consecuencia directa de las acciones del presidente Petro, sus escándalos de corrupción y su retórica incendiaria, con el fin de disuadir al Gobierno entrante de adoptar una postura similar. Sin embargo, es poco probable que los colombianos acepten esta estrategia: [las últimas encuestas](#) muestran que la opinión favorable hacia Estados Unidos ha disminuido significativamente desde la imposición de aranceles y el inicio de deportaciones masivas a principios de 2025. Actualmente, China es vista de forma más positiva que Estados Unidos entre la población colombiana. Es plausible que el presidente Petro aproveche esta percepción negativa de Estados Unidos para promover un sentimiento nacionalista colombiano en respuesta a la descertificación y sus sanciones asociadas. Nuestras fuentes sugieren que la descertificación brindará una oportunidad para que los líderes locales y los municipios asuman un rol más activo, y que es probable que los militares se muestren más abiertos y se involucren en la política antidroga y el liderazgo en materia de seguridad.

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos dependen en gran medida de las relaciones personales entre los presidentes y de la alineación de sus prioridades estratégicas. La aversión personal entre el presidente Petro y el presidente Trump, sin duda, ha complicado las relaciones entre ambos países. Es más probable que la elección de un presidente de derecha en 2026 conduzca a una mejora de las relaciones con Estados Unidos que la elección de un presidente de izquierda que pretenda continuar con el enfoque de «ambigüedad estratégica» del presidente Petro y buscar relaciones más estrechas con China. No obstante, independientemente de la orientación ideológica, el próximo Gobierno deberá encontrar un equilibrio entre preservar la relación estratégica con Estados Unidos y reducir su vulnerabilidad a futuras crisis geopolíticas mediante la diversificación de sus alianzas. Este desafío se presenta en un momento en el que el apoyo estadounidense al Ejército y a los esfuerzos de paz en Colombia resulta cada vez más crítico, dadas las crecientes amenazas en materia de seguridad.

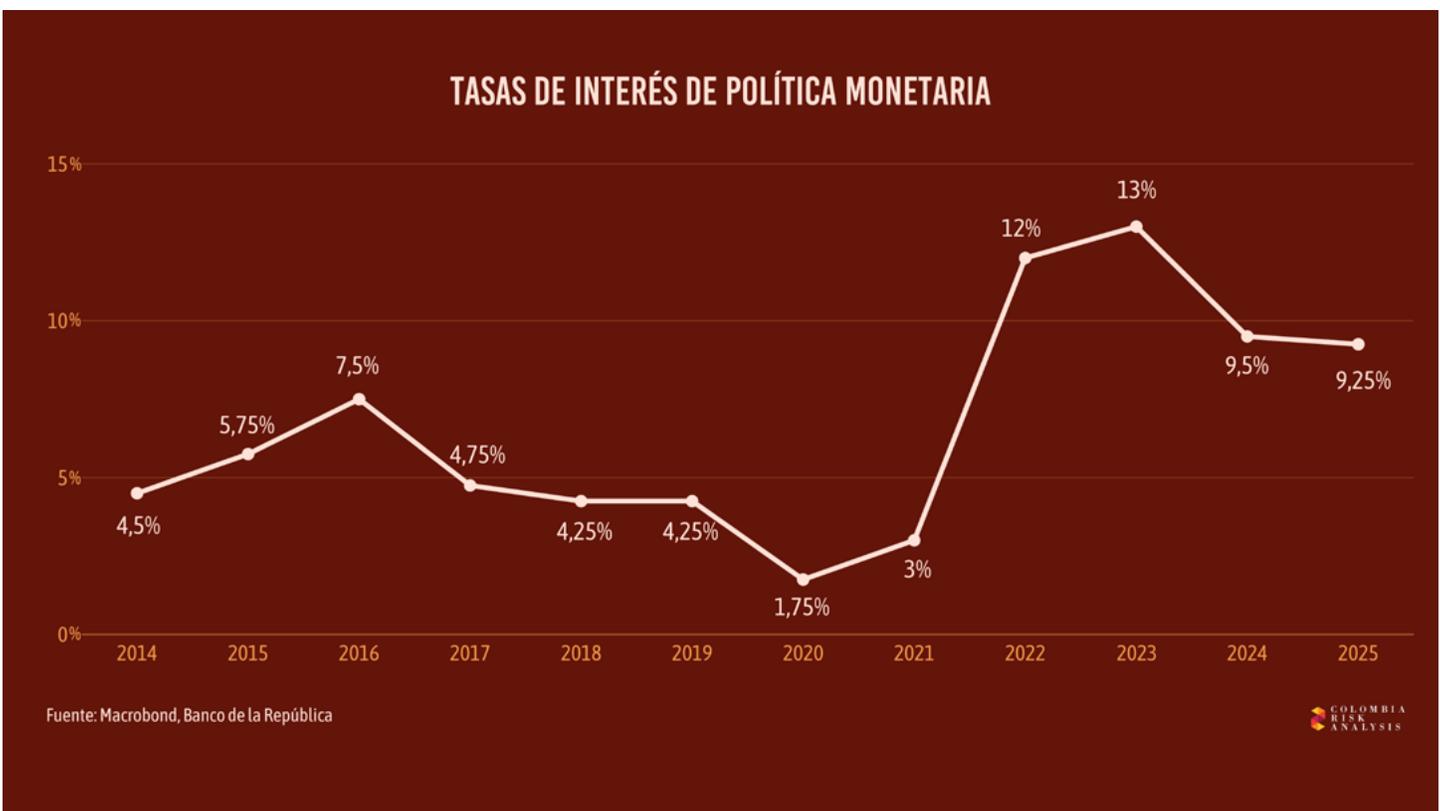
UNA CRISIS FISCAL INMINENTE

Colombia goza de una reputación de estabilidad macroeconómica en América Latina; sin embargo, el creciente déficit fiscal complica su panorama económico. Apesar de que la economía mantiene [un nivel de crecimiento lento](#) con [bajas tasas de desempleo](#), se [estima que el déficit fiscal alcanzará el 7,1 %](#) del PIB en 2025. Este déficit se debe, en parte, a los bajos ingresos fiscales de Colombia, así como a una burocracia ineficiente y a [un gasto primario](#) elevado. Un [régimen fiscal eficaz](#) es fundamental para el desarrollo económico. Muy por debajo [de la media de la OCDE, que será del 33,9 % en 2023](#), la baja proporción de «impuestos sobre PIB» de Colombia, actualmente de 22,2, se debe a problemas estructurales. Entre ellos se destacan [las elevadas tasas de informalidad laboral](#), la deficiente aplicación de la ley, altos índices de evasión fiscal y [la resistencia política a las reformas fiscales](#).



La presencia de grupos armados y economías ilícitas también [socava la estabilidad fiscal de Colombia](#). La gobernanza criminal y la violencia impiden el funcionamiento eficaz de [los sistemas tributarios locales](#), mientras que los municipios donde se cultiva coca [contribuyen con un 34 % menos en impuestos](#). Además, el tamaño del aparato estatal colombiano es desproporcionado en relación con el tamaño de su población, su PIB y sus niveles de recaudación tributaria, siendo considerablemente [mayor que el de Argentina y Brasil](#).

El creciente déficit fiscal llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) [a suspender la línea de crédito de 9.800 millones de dólares estadounidenses](#) a Colombia en abril de 2025, destinada a proteger la economía de las perturbaciones externas. Alegando preocupaciones por [el déficit fiscal y la inflación](#), el Banco de la República de Colombia se negó repetidamente a bajar las tasas de interés, que ahora se sitúa en [9,25 %](#). La [tasa de interés oficial pasó](#) de un promedio de 5,16 % en los seis años previos a la pandemia a una media del 11 % después de 2022, situándose actualmente en un [9,25 %](#). En junio, el Ministerio de Hacienda activó una «[cláusula de escape](#)», oficialmente suspendiendo la regla fiscal y permitiendo al Gobierno superar el gasto presupuestado, lo que empeora la situación fiscal para la próxima Administración.



¿Por qué es importante?

La crisis fiscal impondrá limitaciones importantes a la capacidad de gobernar durante el próximo mandato, ya que deberá equilibrar la necesidad y la demanda social de reformas con unos fondos insuficientes. Independientemente de su orientación política, el nuevo Gobierno se verá obligado a reducir el gasto público para hacer frente al déficit, probablemente mediante la simplificación o el recorte de los ministerios y los servicios públicos. Es probable que este escenario tenga efectos perjudiciales sobre [los índices de desigualdad](#) de Colombia, que ya son los [terceros más altos del mundo](#). Además, el próximo Gobierno tendrá dificultades para aumentar los ingresos fiscales incluso si intenta aprobar una reforma tributaria, puesto



que abordar los problemas estructurales es un proceso costoso y a largo plazo, especialmente cuando implica medidas impopulares.

La Administración Petro está decidida a aprobar una nueva reforma fiscal en la entrante y última legislatura. Sin embargo, es probable que su propuesta se diluya a medida que avance en los debates del Congreso, como ocurrió con [la reforma fiscal](#) del presidente Petro en 2022, o incluso que sea rechazada. Además, la suspensión de la línea de crédito del FMI es señal de una [menor confianza](#) en la salud de la economía colombiana y de una mayor incertidumbre para los inversores. Si bien la suspensión de la regla fiscal indica que el Gobierno reconoce la existencia de una crisis fiscal, persiste una importante falta de [confianza](#) en la capacidad del Gobierno para hacer frente a sus dificultades económicas. Recuperar la confianza de los inversionistas en Colombia como socio económico confiable será una prioridad central para la próxima Administración.

Colombia Risk Analysis publicará un informe exhaustivo en septiembre de 2025 en el que se analizará en profundidad esta cuestión. Animamos a los lectores a mantenerse al día de nuestras actualizaciones en las redes sociales o a suscribirse a nuestro boletín informativo para ser los primeros en leerlo.

POTENCIAL ESCASEZ DE GAS Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Colombia se enfrenta a una [disminución del suministro de gas natural](#) en un contexto de demanda energética en aumento. Se anticipa que las reservas de gas del país se agoten en [siete años](#), mientras que Ecopetrol estima un déficit del 17 % en la demanda nacional para 2026, lo que obligará a aumentar las importaciones de combustible. El compromiso del presidente Petro con la transición hacia energías limpias, que incluye la [prohibición de nuevas exploraciones de gas y petróleo](#), se ve comprometido por la brecha entre el aumento de la demanda y la caída de la oferta, así como [por la caída de la producción de energía](#) procedente de fuentes renovables.

La amenaza de nuevos aranceles estadounidenses a los países que importan petróleo de Venezuela paralizó el plan del presidente Petro de reanudar las importaciones de gas a través del [gasoducto](#) Antonio Ricaurte, actualmente inoperativo. Esto llevó al Gobierno a buscar acuerdos de importación con países alternativos, como [Qatar](#). Sin embargo, actualmente Colombia [carece de la infraestructura necesaria](#) para procesar el volumen de gas importado que se requiere para cubrir el déficit de suministro interno. Además, la corrupción en las empresas energéticas estatales, como se evidenció en el caso de Ecopetrol, ha [desacreditado](#) a la empresa en la esfera internacional, provocando [la caída de los precios de las acciones](#).

Una reciente [revisión de la reforma fiscal de 2016](#) por parte de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) implica que Ecopetrol, la mayor empresa del país, ahora [debe](#) COP 9,4 billones en concepto del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Dado que la empresa aporta entre el 12 % y el 15 % de [los ingresos fiscales](#) del país, es probable que el reembolso de impuestos de Ecopetrol tenga efectos perjudiciales. El reembolso no cubrirá el déficit fiscal y probablemente limitará la capacidad de la empresa para participar en proyectos de exploración de hidrocarburos en los próximos años, que son fundamentales para hacer frente al déficit de suministro energético y garantizar la estabilidad a largo plazo de la empresa. Si se materializa la medida, es probable que también desaliente nuevas inversiones en el sector energético colombiano, ante el temor de que otras empresas enfrenten sanciones fiscales similares.



¿Por qué es importante?

Si no se logra cubrir el déficit entre la oferta y la demanda de electricidad, [se corre el riesgo de que aumenten los apagones](#), potencialmente a escala nacional. Los apagones recientes en otros países de la región, particularmente en [Ecuador](#) en 2024, han tenido costes económicos y sociales significativos. La disminución de la producción nacional de gas natural amenaza [la autosuficiencia](#) de Colombia, aumentando su dependencia energética de socios externos. La escasez de gas natural también conllevará [un aumento de los precios](#) para los consumidores, ya que la regulación vigente permite a las empresas trasladar esos costos. Además, 12 millones de colombianos dependen del gas natural como combustible, la mayoría de ellos en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El costo de vida ya es una [preocupación clave para los votantes](#), y esta crisis energética llega en un momento en que los consumidores colombianos corren el riesgo de enfrentar nuevos aumentos debido a la potencial imposición de [aranceles adicionales por parte de Estados Unidos](#). Es probable que la energía se posicione como un tema regional en las elecciones. Por ejemplo, los votantes de las zonas más afectadas por la escasez de electricidad, como la costa Caribe, son más propensos a buscar propuestas energéticas concretas que los votantes de Bogotá, quienes están aislados frente a las subidas de precios. La escasez y el aumento de los precios probablemente provocarán malestar social, especialmente en las regiones afectadas, donde en el último año, han surgido nuevos [movimientos](#) en torno a cuestiones energéticas. Esta situación también obstaculizará el desarrollo económico de Colombia, ya que generará incertidumbre para industrias dependientes del suministro energético y para inversionistas en un entorno marcado por mensajes contradictorios provenientes de distintos ministerios del Gobierno. La Administración entrante deberá equilibrar la escasez inmediata de gas con la necesidad de una transición hacia energías limpias y [la diversificación de las fuentes energéticas](#) a mediano y largo plazo. El desarrollo de la infraestructura energética de Colombia es fundamental para su estabilidad económica.

CORRUPCIÓN

La corrupción es la [tercera preocupación más importante](#) de los colombianos, después de la inseguridad y el acceso a la salud; por lo tanto, será indispensable que todos los candidatos adopten una postura clara en materia de políticas de anticorrupción y que la campaña presidencial sea transparente. La corrupción ha sido un problema endémico en Colombia desde hace mucho tiempo, afectando a diversos sectores y suponiendo pérdidas anuales equivalentes al [5,3 % del PIB total del país](#). De los [casos de corrupción identificados en 2021 y 2022](#), el 62 % fueron administrativos, el 17 % políticos, el 13,5 % privados y el 6,7 % judiciales. La corrupción es más frecuente en el sector público, especialmente en [la contratación pública](#), lo que afecta la prestación de servicios y la gestión de [proyectos de infraestructura](#). La baja confianza de la ciudadanía en [el sistema judicial](#) se ve agravada por su incapacidad estructural para hacer frente a la corrupción de manera eficaz. Por ejemplo, la Procuraduría [perdió la mitad](#) de los casos que presentó en 2019, y la Dirección Especializada Contra la Corrupción solo ganó el 2 % de todos los casos que presentó entre 2014 y 2021.

El Gobierno Petro no ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción y, por el contrario, se ha visto envuelto en numerosos escándalos. Miembros del Gobierno del presidente Petro han sido acusados de corrupción vinculada a la financiación de su [campaña presidencial](#) de 2022. Las dudas sobre el origen de estos fondos evocan el caso del expresidente Juan Manuel Santos, implicado en el [escándalo de Odebrecht](#). Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y director de campaña de Petro, está directamente implicado en el escándalo. Además, Ecopetrol se convirtió en objeto de críticas adicionales por [daños medioambientales ilegales](#) y una [auditoría interna](#) sobre el propio Roa.



El escándalo de corrupción de 2024 en torno a sobornos y coisiones ilegales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) implicó a miembros del Congreso de [seis partidos](#) de todo el espectro político, acusados de soborno para apoyar las reformas del presidente Petro en el Congreso. Este escándalo involucra a miembros clave del círculo íntimo del presidente Petro, entre ellos: [Carlos Ramón González](#), exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), [Ricardo Bonilla](#), exministro de Hacienda, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes dirigían la UNGRD y subsecuentemente firmaron un [acuerdo de cooperación como testigos](#) con la Fiscalía. Más recientemente, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, [renunció](#) y declaró en una entrevista que miembros del gabinete del presidente Petro estaban intentando influir en sus nombramientos para diferentes cargos gubernamentales. Además, la [politización de la Fiscalía](#), que se manifestó [desde el principio del mandato del presidente Petro](#) a través de repetidos enfrentamientos con el ex fiscal general Francisco Barbosa, socava la capacidad de la institución para combatir eficazmente la corrupción.

¿Por qué es importante?

Los escándalos de corrupción en las altas esferas del Gobierno, especialmente aquellos que buscan socavar la integridad de otros poderes del Estado y que generan preocupación entre los votantes, tienden a fortalecer el apoyo a candidatos que promueven programas anticorrupción o campañas antisistema basadas en la transparencia. Sin embargo, es poco probable que la revelación de otro escándalo de corrupción que salpique al Gobierno reduzca de forma significativa el apoyo ya consolidado hacia él o su potencial candidato. Esto, considerando la resistencia que ha demostrado su base de apoyo a pesar de los escándalos de corrupción que han salido a la luz durante su mandato y que implican a funcionarios del Gobierno.

En cambio, las acusaciones de corrupción contra otros candidatos o partidos políticos probablemente afectarán el apoyo hacia ellos y proporcionarán a sus rivales un punto de crítica influyente. Los candidatos que se presentan con plataformas antisistema son más propensos a verse afectados negativamente por acusaciones de este tipo, dado que socavan el mensaje de su campaña. Las revelaciones de corrupción son más propensas a influir en la percepción de los candidatos cuanto más cerca se producen de la fecha de las elecciones, [pues su efecto se debilita con el tiempo](#). Más que nada, la injerencia política en las empresas pone en riesgo la reputación de Colombia como receptora de inversión extranjera directa. Para mejorar la confianza tanto del público como de los inversores en Colombia, el nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a garantizar la [independencia de las instituciones encargadas](#) de investigar la corrupción, incluida la Fiscalía, y [reforzar su capacidad](#) mediante la asignación de recursos y formación adicionales a los funcionarios, especialmente en las zonas regionales con menos supervisión.

REFORMAS SOCIALES E INCLUSIÓN

A raíz de la pandemia, que [profundizó las desigualdades socioeconómicas](#) en Colombia, [la campaña del presidente Petro prometió llevar a cabo una reforma a gran escala](#) relacionada con una amplia parte del electorado colombiano. Sin embargo, al ser uno de los [países más desiguales](#) del mundo, lograr un cambio exitoso significa enfrentarse a problemas estructurales arraigados. Las reformas sociales son fundamentales para lograr una paz sostenible, [ya que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo formal](#) son factores clave para el reclutamiento de pandillas. El actual Gobierno ha logrado [avances significativos en las reformas agrícolas](#), un aspecto clave del acuerdo de paz de 2016, mediante el establecimiento de zonas de reserva para agricultores y la formalización de la tierra, aunque no ha alcanzado su ambicioso objetivo de formalizar 17,3 millones de acres, habiendo logrado 3,2 millones en noviembre de 2024.



Aunque la agenda reformista del presidente Petro tuvo éxito en el primer año de su mandato, se estancó ante la resistencia significativa del sector empresarial y la pérdida de apoyo multipartidista en el Congreso, obstaculizando la aprobación de nueva legislación. La reforma pensional, [aprobada inicialmente en junio de 2024](#) y nuevamente en junio de 2025, [reestructura la red de pensiones de Colombia](#), integrando los sistemas público y privado para aumentar la cobertura y proporcionar una mayor protección a los ciudadanos de edad avanzada. Además de [las deliberaciones en curso sobre la legalidad de los cambios](#), una preocupación central es el [costo que supone para el Estado](#) y la [viabilidad a largo plazo](#) de la reforma.

El presidente Petro logró una importante victoria política en junio de 2025 con la aprobación de la reforma laboral. La ley, que [amplía las protecciones para los trabajadores](#), incluyendo prestaciones médicas y de seguridad social y el aumento del pago de horas extras, era una promesa clave de la campaña que había sido rechazada en dos ocasiones anteriores por el Congreso. El proyecto de ley fue ampliamente [criticado por la oposición](#) y el sector empresarial, que temen que la reducción de la jornada laboral y el aumento de las indemnizaciones perjudiquen a las pequeñas empresas, potencialmente obligándolas a despedir personal. Además, señalan que la reforma beneficia principalmente a los trabajadores asalariados. Aunque la informalidad laboral ha disminuido desde 2010, Colombia sigue teniendo una tasa elevada que se acerca al 60 %. Al igual que la reforma pensional, la reforma laboral plantea [preocupaciones fiscales](#).

[Una reforma estructural](#) del sistema nacional de salud sigue siendo muy necesaria, ya que la sanidad es una de las [principales preocupaciones](#) de los colombianos, con un 72 % que considera que el sistema está [empeorando](#). El sistema de salud colombiano ofrece cobertura al [97 % de los ciudadanos](#), pero [la falta de financiación](#) persistente ha provocado un deterioro en la calidad de la atención, especialmente para los pacientes de los sectores más pobres. Los ciudadanos se enfrentan a [una preocupante escasez de medicamentos](#) y al [hacinamiento](#) en las instalaciones. Las intervenciones del Gobierno [no han logrado mitigar la crisis financiera del sector](#), y los principales proveedores advierten del riesgo de [un colapso inminente](#). Si bien existe consenso sobre la necesidad de reformar el sistema, los partidos políticos están divididos sobre su contenido. La transformación de las Entidades Promotoras de la Salud (EPS) es un tema especialmente controvertido entre el Gobierno y los partidos de derecha, que se oponen a los cambios en su funcionamiento. Las propuestas de reforma al sistema presentadas por el Gobierno del presidente Petro han sido [criticadas](#) en repetidas ocasiones por su inviabilidad financiera y, posteriormente, rechazadas tres veces por el Senado.

¿Por qué es importante?

La llegada del primer Gobierno de izquierda a Colombia, bajo la presidencia de Petro, dio prioridad a las demandas de los grupos sociales tradicionalmente excluidos del espacio político. El Gobierno otorgó representación a estos grupos sobre todo a través de la coalición del Pacto Histórico. Es muy improbable que estos grupos desaparezcan del espacio político en caso de una derrota de la izquierda e, independientemente del resultado de las elecciones, las demandas de cambio social efectivo seguirán estando presentes en el discurso sociopolítico. El fracaso en la aprobación o implementación efectiva de reformas estructurales genera una expectativa latente sobre el próximo Gobierno, que deberá llevar a cabo [costosas](#) reformas en un contexto marcado por severas restricciones fiscales. La crisis del sistema de salud continuará agravándose a medida que los problemas financieros dificultan la calidad de la atención, generando un mayor descontento social. Además, es probable que la transición al nuevo sistema de pensiones siga en curso cuando el próximo Gobierno llegue al poder. Anticipamos que se requieran supervisiones y ajustes adicionales para garantizar su viabilidad.

Aunque ya ha sido aprobada por el Senado, la reforma laboral se convirtió en objeto de una discusión sobre la democracia y la extralimitación del poder ejecutivo tras [la derrota de la consulta popular](#). La llamada del presidente Petro a una [asamblea constituyente](#) se apoyó en la narrativa de que un «bloqueo institucional» había impedido el cambio social que representa su mandato. Es probable que la politización de las reformas sociales continúe durante la campaña electoral y en el próximo Gobierno.

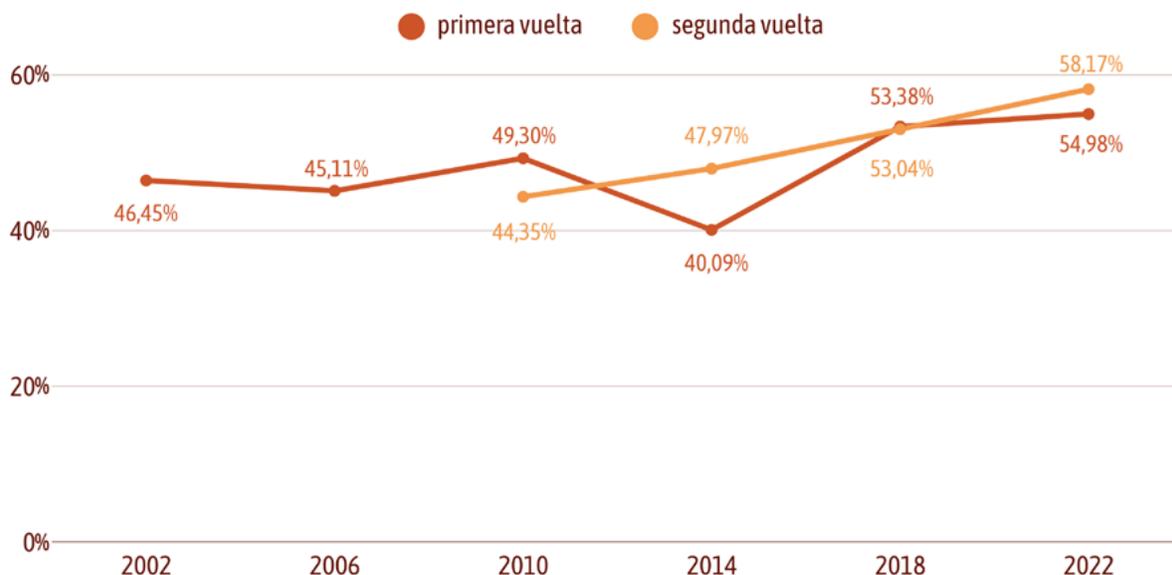


SECCIÓN 2: CANDIDATOS PRESIDENCIALES

En esta sección se presenta un perfil de los principales candidatos, destacando sus objetivos políticos más relevantes, así como sus asesores y alianzas potenciales. Por razones logísticas, no fue posible perfilar a los 75 candidatos, por lo que hemos reducido el enfoque a tres candidatos de la izquierda, tres del centro y tres de la derecha. A pesar de que, como hemos mencionado, se trata de una contienda abierta a la fecha de agosto de 2025, consideramos que las posiciones de estos candidatos son representativas del panorama político general. Nuestra selección se ha basado en la intuición, el criterio y los resultados de encuestas, más que en una metodología científica formal.

[La participación electoral](#) en las elecciones presidenciales de Colombia suele ser moderada o baja en comparación con otros países de América Latina, ubicándose alrededor del 55 %. Sin embargo, desde 2014 la participación ha [aumentado](#) consistentemente, alcanzando su máximo en 20 años en la segunda vuelta de 2022. La [encuesta más reciente](#), realizada a principios de julio de 2025, ubica a Miguel Uribe en primer lugar con un 13,7 % de intención de voto, seguido de cerca por Victoria Dávila y Gustavo Bolívar, con un 11,5 % y un 10,5 %, respectivamente. No obstante, los niveles de apoyo a cada candidato son notablemente bajos, con el 5,3 % de los encuestados indicando que no votaría por ningún candidato. Esta tendencia es indicativa del desencanto de los votantes tanto con las candidaturas como con la gestión pública en general. Las elecciones regionales de 2023 fueron percibidas en gran medida como un referendo sobre el primer año del presidente Petro en el cargo, y sus resultados mostraron un [rechazo significativo al presidente en los principales centros urbanos](#) y un fracaso en la consolidación del proyecto progresista en ciudades secundarias y terciarias.

PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES



Fuente: International IDEA



La [ley que suspende la publicación de encuestas sobre las intención de voto](#), anunciada en julio de 2025, probablemente beneficiará a los candidatos que aspiran a una nominación de su partido, ya que no pueden hacer campaña hasta que ganen el proceso de nominación interna en octubre. Asimismo, esta prohibición temporal de las encuestas probablemente beneficiará a los partidos establecidos y al Gobierno frente a los candidatos que se presentan con firmas. Dado que la prohibición finaliza el 31 de octubre, coincidiendo con las consultas internas de los partidos, es poco probable que tenga un impacto significativo en el resultado de las elecciones, aún lejanas a la fecha de estas votaciones. Sin embargo, sí genera preocupación la facilidad con la que la desinformación puede filtrarse entre el electorado, considerando los altos niveles de ansiedad electoral y la fuerte demanda de información sobre las encuestas y las elecciones por parte de actores interesados, incluyendo al sector privado, los inversionistas extranjeros directos y los diplomáticos.

El intento de asesinato contra el candidato presidencial Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio, refleja las crecientes tensiones que caracterizan el panorama político y que muy probablemente dominarán la contienda electoral. A pesar de los llamados a la unidad y al rechazo de la violencia en todo el espectro político, el incidente no ha generado un cambio en la retórica. Diversas figuras políticas y candidatos [responsabilizan a la retórica agresiva del presidente Petro](#) de incitar la violencia, mientras que la oposición ha decidido no reconocerlo como garante de las elecciones. El atentado contra un candidato presidencial modificará la contienda electoral más allá de las implicaciones evidentes para las nominaciones internas del Centro Democrático.

El apoyo popular a las figuras de la oposición [aumentó](#) tras el atentado, y es probable que el incidente favorezca a los candidatos polarizantes que promueven enfoques más duros y radicales frente al crimen y la seguridad. El incidente ha puesto en duda [la capacidad del Gobierno para proteger a los candidatos](#) durante la campaña, y [varios de ellos han suspendido sus actividades](#) hasta que se garantice una mayor seguridad. Es probable que la naturaleza de la campaña se vea afectada, al menos en el corto plazo: los actos de campaña estarán restringidos en mayor medida si se celebran al aire libre, o se llevarán a cabo en espacios virtuales, lo que limitará el contacto entre los candidatos y los votantes prospectivos y probablemente afectará a los candidatos que buscan firmas. Los candidatos al Congreso corren más riesgo que los candidatos presidenciales, ya que es menos probable que reciban protección del Gobierno y suelen hacer campaña en zonas más remotas. Es poco probable que los actos de violencia política en esta fase temprana de la contienda electoral afecten el resultado de las elecciones presidenciales, a menos que haya indicios de que las amenazas violentas vayan a continuar, potencialmente desincentivando a los candidatos de participar.

Para lograr una gobernanza efectiva, el próximo presidente de Colombia deberá reunir y mantener el respaldo del Congreso. Por lo tanto, los candidatos presidenciales deben movilizar el apoyo para las elecciones al Congreso a través de coaliciones basadas en políticas y prioridades compartidas. Como se explicó en la sección anterior, la polarización y la fragmentación del poder legislativo dificultan considerablemente este proceso. Es probable que los candidatos presidenciales deban hacer concesiones en ciertos principios o posturas, lo que supone un riesgo de pérdida de apoyo electoral y pone en peligro la coherencia de la coalición, poniendo en duda su longevidad. Mientras tanto, la politización de la contienda presidencial actualmente eclipsa la conformación de las listas al Senado, que deben presentarse el 8 de diciembre de 2025, mucho antes de las elecciones presidenciales.



CANDIDATOS POTENCIALES:

Aspiran ganar	Buscan futuros puestos en el gabinete	Buscan reconocimiento para presentarse al Congreso	Se posicionan para las elecciones locales de 2027
IZQUIERDA	CENTRO	DERECHA	
Gustavo Bolívar Luis Gilberto Murillo María José Pizarro Daniel Quintero Roy Barreras	Sergio Fajardo Claudia López * Maurice Armitage	Victoria Dávila * María Fernanda Cabal Germán Vargas Lleras	
Camilo Romero Mauricio Lizcano *	Juan Manuel Galán Alejandro Gaviria Aníbal Gaviria Daniel Oviedo *	Francisco Barbosa Mauricio Cárdenas * Juan Carlos Echeverry Abelardo de la Espriella José Félix Lafaurie Juan Carlos Pinzón	
Luis Carlos Reyes Martha Peralta Carolina Corcho Iván Cepeda	Ingrid Betancourt Jorge Enrique Robledo	Juan Guillermo Zuluaga Miguel Uribe JP Hernández Daniel Palacios	
Susana Muhamad	Héctor Olimpo Jaime Pumarejo	Paloma Valencia David Luna *	

* Candidatos que han registrado oficialmente su candidatura por firmas



LOS CANDIDATOS DE LA IZQUIERDA:

Si bien la popularidad del presidente Petro se ha mantenido [relativamente estable](#), rondando el 34 % de los votantes, lo que indica que cuenta con un grupo de seguidores leales, la incapacidad de su Gobierno para implementar reformas clave de su campaña y el fracaso de la política de paz total ahora lo sitúan en un punto bajo, según nuestro [Índice Agregado de Favorabilidad Presidencial, con un 34,7%](#). Esta caída en la aprobación es indicativa de un creciente pesimismo en Colombia en algunos indicadores clave, como la seguridad, la salud, la corrupción, la economía y la capacidad del Gobierno para cumplir sus promesas de transformación social.

Como explicamos en nuestro *Colombia Risk Monthly #79*, la consolidación de los partidos de izquierda de la coalición Pacto Histórico en un [único movimiento político](#) reducirá las divisiones en la izquierda. Su éxito dependerá de su capacidad para unirse en torno a un candidato que tenga vínculos con los partidos y políticos tradicionales. Sin embargo, no está claro quién será ese candidato. El movimiento confirmó que elegirá a sus candidatos a la presidencia y al Congreso en [consultas abiertas el 26 de octubre](#) de 2025. Para participar en la consulta, los candidatos deben estar [afiliados a uno de los partidos de la coalición o ser miembros de sus organizaciones sociales asociadas](#).



Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Susana Muhamad, Gloria Flórez, Camilo Romero y Daniel Quintero han [confirmado su participación](#) en las consultas del Pacto Histórico. La candidatura de Quintero ya ha generado tensiones, con [Bolívar cuestionando su inclusión](#) a raíz de las acusaciones de corrupción en su contra. Cabe destacar que María José Pizarro no es actualmente precandidata. El Pacto Histórico tiene previsto celebrar una [consulta interpartidista en marzo de 2026](#) para formar un «frente amplio» de partidos de izquierda y sectores progresistas. Es probable que las tensiones dentro de la coalición del Pacto Histórico afecten la campaña del partido, incluyendo [la frustración](#) del presidente Petro por la aparente conformidad de su partido ante el fracaso de la votación sobre la consulta popular, así como las tensiones entre los miembros, en particular entre [María José Pizarro y Gustavo Bolívar](#).

El presidente Petro está cada vez más [aislado](#) dentro de su Administración y su partido; sin embargo, es probable que sea la figura central en la contienda por su sucesión. La convocatoria de la consulta popular y la concentración de [simpatizantes](#) en Cali demuestran un cierto grado de apoyo popular al presidente Petro y a su agenda reformista, a pesar de las tensiones en torno a su inconstitucionalidad. En particular, el presidente Petro sigue contando con el apoyo de [las comunidades indígenas y afrocolombianas](#), que desean continuidad para lograr los cambios prometidos por el Gobierno. Aunque el presidente Petro mantiene una parte significativa del apoyo popular, este no es suficiente para transferirlo a un candidato de su elección. Ya lo intentó sin éxito en las elecciones locales de 2019 y 2023, donde los candidatos Hollman Morris y Gustavo Bolívar quedaron en cuarto y tercer lugar, respectivamente, en unas elecciones que Petro ganó fácilmente.

La consolidación del Pacto Histórico en un solo partido unifica a la izquierda en términos de opciones electorales. Esta situación deja pocas alternativas electorales para los votantes de izquierda que no están de acuerdo con el enfoque de este partido o que están decepcionados con los avances del actual Gobierno. Es probable que los otros partidos y candidatos de izquierda, algunos de los cuales probablemente sean antiguos funcionarios del Gobierno Petro, participen en las consultas interpartidistas de marzo de 2026 para unirse al «frente amplio». Esta propuesta fue creada y [promovida](#) por el presidente Petro, su ministro del Interior, Armando Benedetti, y el Pacto Histórico. En caso de que un candidato ajeno a este último gane las consultas, es probable que el presidente Petro intente cooptar y ejercer una fuerte influencia en el candidato.

A principios de julio de 2025, el [movimiento Unitarios](#) anunció su intención de hacer campaña de forma independiente del Pacto Histórico en las elecciones de 2026. Unitarios agrupa a Comunes, Todos Somos Colombia, Esperanza Democrática, Sí Podemos, Democracia Desde Abajo y Liberales de Base. Aquí destaca que entre sus potenciales candidatos a la presidencia se encuentran personas que anteriormente eran cercanas al presidente Petro, concretamente, Carolina Corcho y Luis Carlos Reyes. Aunque el movimiento sigue alineado con el presidente Petro y el Pacto y tiene la intención de participar en las consultas interpartidistas propuestas para formar una coalición de «frente amplio», este planea presentar sus propias listas al Congreso. Es probable que el movimiento obtenga pocos escaños, si es que consigue alguno, principalmente porque [Comunes ya no tiene garantizados sus escaños](#) y los antiguos líderes de las FARC son políticamente impopulares, lo que agrava la fragmentación de la izquierda y reduce sus posibilidades de obtener una cuota significativa de cupos en el Congreso.

La formación de nuevas coaliciones por parte de los partidos políticos y los miembros del Congreso en junio de 2025 indica que el enfoque está pasando de la gobernanza a la campaña electoral. Este cambio implica que es improbable que el Gobierno Petro logre consolidar más reformas en el último año de su mandato, lo que lo obligará a recurrir, en mayor medida, al argumento de que se necesita más tiempo para alcanzar el cambio prometido. La creciente frustración del presidente Petro por su incapacidad para cumplir su agenda explica el anuncio de [otra remodelación del gabinete a mediados de julio de 2025](#). El presidente acusó a sus ministros de impedirle gobernar, atribuyendo las deficiencias de su Administración a disputas internas, conspiraciones, traiciones y a la falta de experiencia política. Es poco probable que un nuevo gabinete mejore significativamente la capacidad de Gobierno del presidente Petro; por el contrario, es más probable que profundice las divisiones entre sus seguidores y dificulte la conformación de futuras coaliciones.





GUSTAVO BOLÍVAR

Aunque es relativamente nuevo en el escenario político, Gustavo Bolívar ha acumulado experiencia rápidamente y ha ganado visibilidad como senador y como director del Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Petro. A pesar de los recientes roces entre el presidente y Bolívar, este último apoya muchas de las políticas del presidente Petro y es muy probable que dará continuidad a las políticas del Gobierno en caso de ser elegido.

Principales objetivos políticos:

Una prioridad central de la presidencia de Bolívar será la implementación de las reformas aprobadas por el Gobierno del presidente Petro que aún no se han llevado a cabo. Bolívar ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo a las consultas populares sobre las reformas y a una votación popular sobre una [asamblea constituyente](#). Es probable que Bolívar haga una campaña intensa a favor de una asamblea constituyente que otorgue al nuevo Gobierno poderes amplios para volver a debatir algunas cuestiones como la reelección, la reforma a la salud, la reforma de los servicios públicos, la reforma del código minero y otras medidas que afectarían al sector privado.

Uno de los ejes centrales de la campaña de Bolívar es la lucha contra la desigualdad, lo cual influye en su enfoque en la paz y la seguridad. Tras el atentado contra Miguel Uribe, Bolívar llamó a un [«pacto nacional»](#) en el que todos los sectores se comprometían a reducir la brecha de desigualdad que alimenta la violencia. La propuesta incluye la redistribución de los ingresos, el apoyo a las pequeñas empresas y una reforma del sistema judicial, entre otras medidas. Bolívar declaró que continuaría negociando con todos los grupos armados, incluido el ELN, con un plazo máximo de 100 días, tras el cual, si no se logra un acuerdo, pondría fin a las conversaciones y recurriría a la acción militar. Esta propuesta tiene una viabilidad limitada, dado que el éxito de las negociaciones depende de una influencia de la que el Gobierno carece actualmente. Además, su enfoque no logra diferenciarse del de la Administración actual, que ha perdido el apoyo popular y del Congreso.

Equipos y asesores potenciales:

Bolívar anunció su candidatura el 16 de julio de 2025, junto con su intención de formar [comités regionales de campaña](#) como parte de su movimiento «Defensores del Cambio». Los comités estarán conformados por voluntarios.

Alianzas potenciales:

Cuando se postuló a la alcaldía de Bogotá en 2023, Bolívar se negó a establecer alianzas, lo que probablemente contribuyó a su derrota. Sin embargo, en junio de 2025, el candidato instó al público a [votar en las elecciones legislativas de 2026](#), con el fin de asegurar una mayoría en el Congreso para su presidente. Esta medida indica que es consciente de la necesidad de contar con el apoyo legislativo para implementar las reformas, por lo que es probable que, más adelante, Bolívar busque coaliciones en la contienda electoral que le permitan evitar otro Gobierno «bloqueado».

Bolívar fue uno de los principales artífices de la estrategia del presidente Petro en redes sociales, beneficiándose de la generosa financiación estatal para promover los esfuerzos del Gobierno y contrarrestar las críticas de la oposición y de los medios de comunicación tradicionales. Esta estrategia incluyó [la contratación de influencers en las redes sociales](#). Sin embargo, la acusación que hizo Bolívar en julio de 2025 sobre el [pago a influencers para criticarlo](#), pone en peligro dicho apoyo para una potencial campaña presidencial.

Consideraciones adicionales:

Bolívar es una figura polarizante y ha sido objeto de diversas tensiones con el Pacto Histórico. Bolívar fue un asesor cercano del presidente Petro, apoyando su candidatura en 2018 y participando como asesor en su campaña presidencial de 2022. Como señalamos en abril en nuestro *Colombia Risk Monthly* #79, a pesar de encabezar las encuestas presidenciales, la derrota de Bolívar frente a Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, en las elecciones a la alcaldía de Bogotá de 2023, pone en duda su capacidad para atraer a los seguidores del presidente Petro.

Aunque Bolívar es el candidato más visible del Pacto Histórico y encabeza las encuestas para la candidatura de la izquierda, es probable que pierda frente a otro candidato en una contienda abierta. Por ley, el presidente Petro no puede participar en la política electoral ni [respaldar](#) directamente la candidatura de Bolívar; sin embargo, [las críticas al nombramiento](#) de Bolívar de Armando Benedetti y Laura Sarabia sugieren un distanciamiento entre ambos. Bolívar ha reiterado que solo se presentaría como candidato del Pacto Histórico si existiera un mecanismo [de votación](#) en lugar de un proceso de selección. Esta postura refleja las divisiones internas del Pacto Histórico, que probablemente dificultarán la construcción de una propuesta unificada de izquierda en torno a Bolívar.

Sin embargo, es importante destacar que Bolívar se dirige al núcleo de los votantes comprometidos con el presidente Petro y sus políticas, en particular los de [los estratos de menores ingresos](#). Como ex director del Departamento de Prosperidad Social, es probable que Bolívar se beneficie del apoyo de estos votantes, dado [el papel de su departamento en la concesión de subsidios](#). Las transferencias de efectivo han fomentado [un apoyo constante a los gobiernos en el poder](#) de manera demostrable. Bolívar comparte las críticas del presidente Petro al Banco de la República, llamando [«golpe económico blando»](#) a su negativa a bajar las tasas de interés.





MARÍA JOSÉ PIZARRO

María José Pizarro es una aliada cercana al presidente Petro y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta del Senado. Miembro del Pacto Histórico, Pizarro es [hija](#) del ex candidato presidencial y comandante guerrillero del M-19 Carlos Pizarro, por lo que su nombre está fuertemente asociado a la causa izquierdista.

Principales objetivos políticos:

Pizarro ha declarado que, de ser elegida presidenta, [continuará con el legado y el proyecto político del presidente Petro](#). Probablemente debido a su anterior trabajo en el reconocimiento de las víctimas y como [delegada en las conversaciones con el ELN](#), respalda la política de paz total y un enfoque basado en las causas estructurales. Ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos civiles, [rechazando apoyar](#) un enfoque al estilo de Bukele hacia la violencia y abogando, en cambio, por una política de seguridad centrada en la ayuda humanitaria, la oferta de oportunidades y [las garantías sociales](#).

Pizarro concede importancia a la transición energética y la diversificación de la economía, y llama a un mayor apoyo a [las pequeñas empresas](#). La candidata respalda el fortalecimiento de las relaciones con China y otras economías en crecimiento, con el fin de [diversificar las alianzas de Colombia](#) y reducir la dependencia de Estados Unidos. Sorprendentemente, durante un debate afirmó que [renovaría las relaciones con Israel](#), rompiendo con la postura del presidente Petro.

Es probable que Pizarro continúe los esfuerzos en materia de [inclusión](#) y ampliación [de derechos](#) que puso de relieve durante su etapa como senadora.

Equipos y asesores potenciales:

Aunque Pizarro [ha declarado su deseo de presentarse](#) como candidata presidencial del Pacto Histórico en 2026, aún no se ha inscrito

oficialmente como candidata en el Registro Nacional, por lo que no ha revelado ningún asesor.

Alianzas potenciales:

Pizarro tiene la intención de presentarse como candidata por el Pacto Histórico y se espera que participe en el proceso de nominación interna. Como candidata elegida, recibiría el apoyo del Pacto Histórico y sus aliados. Sin embargo, dadas las divisiones dentro de este partido, es probable que su nominación suponga la pérdida de algunos apoyos, como los de los partidarios de Bolívar.

Consideraciones adicionales:

Pizarro busca encontrar un equilibrio entre seguir apoyando firmemente al presidente Petro y forjar una identidad propia para su candidatura. Además de hacer énfasis en su identidad como mujer, se considera una «[izquierda diferente y nueva](#)». Dado lo mucho que Pizarro sigue los pasos de Petro, es poco probable que esta táctica tenga éxito. En una reciente [encuesta de intención de voto realizada en julio de 2025](#), Pizarro ocupó el séptimo lugar entre todos los candidatos presidenciales, con solo el 3,2% de los votos, frente al 10,5% de Bolívar.

Aunque Pizarro suele destacar la [importancia del diálogo](#) y de la defensa de las instituciones democráticas, respaldó el decreto ejecutivo del presidente Petro que convocaba un referendo y se declaraba [fraude](#) en la votación del Senado.





ROY BARRERAS

Roy Barreras es una figura conocida en el escenario político colombiano, con una amplia trayectoria en cargos gubernamentales, entre los que destaca el de [embajador de Colombia en el Reino Unido](#) bajo el mandato del presidente Petro. Barreras aparentemente lanzó su campaña con una [serie de videos de TikTok](#) el 18 de junio de 2025, aunque aún no se ha registrado oficialmente como candidato independiente. Ha confirmado [que no participará en la consulta interna del Pacto Histórico](#) en octubre de 2025. Sin embargo, probablemente participará en una consulta interpartidista con

miembros del Pacto en marzo de 2026. Sus oponentes lo critican por ser un «camaleón» político, ya que ha ocupado cargos en diferentes escenarios políticos y ha sido miembro del Congreso bajo diferentes partidos durante varios gobiernos, con el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, antes de alinearse más recientemente con el Pacto Histórico.

Principales objetivos políticos:

La principal propuesta de campaña del ex embajador se centra en [el consenso](#), en la necesidad de construir acuerdos entre los grupos políticos y sociales para lograr avances en Colombia y en su figura como el político mejor posicionado para liderar ese proceso. En este sentido, también ha advertido que la victoria de un candidato de derecha en 2026 probablemente provocará protestas que, si se enfrentan con la fuerza, podrían provocar una escalada de inestabilidad social, ante lo cual él se presenta como la solución.

Barreras se ha centrado en abordar [la desigualdad](#) como un objetivo político clave de su potencial presidencia. Al respecto, se ha mostrado en desacuerdo con la suspensión de la exploración de gas y petróleo, argumentando que es necesaria para [financiar la transición energética y hacer frente a la deuda de Colombia](#). Es muy probable que, como presidente, Barreras reanude la exploración de combustibles y promueva la diversificación de las fuentes de energía.

En materia de política exterior, Barreras probablemente adoptará un enfoque más mesurado, tras haber advertido al presidente Petro de la necesidad de [mantener buenas relaciones con Estados Unidos, China y la Unión Europea](#) para garantizar la estabilidad económica de Colombia. El candidato también ha concluido recientemente una gira por cuatro países (China, Corea, España y Estados Unidos) para buscar apoyo a su candidatura y reforzar su credibilidad en materia de política exterior.

Equipos y asesores potenciales:

Barreras tiene una influencia limitada en Internet en comparación con otros candidatos; sin embargo, el estratega político [Ángel Beccassino](#), quien organizó la campaña de Rodolfo Hernández en 2022, se ha unido al equipo de Barreras. Beccassino tiene un historial de campañas exitosas, lo que probablemente aumentará la influencia y el alcance del candidato.

Alianzas potenciales:

Barreras ha insinuado que un candidato de centroizquierda ganará las elecciones (probablemente refiriéndose a sí mismo). Además, busca liderar esta [coalición de centroizquierda](#) y quiere celebrar una consulta interpartidista en marzo de 2026 para elegir un candidato de centroizquierda que represente una postura progresista frente

a la derecha. Sin embargo, el Pacto Histórico no lo incluye en sus conversaciones. Actualmente, este partido se está consolidando como un movimiento de izquierda y, por lo tanto, es menos abierto a la creación de un pacto progresista de centroizquierda en este momento. También es muy poco probable que los candidatos de centro acojan a Barreras en potenciales esfuerzos de coalición, dado que en las elecciones de 2022, cuando trabajaba en la estrategia de campaña de Petro, se dedicó a [intentar desacreditar](#) a varios de ellos, incluidos Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

La trayectoria de Barreras como miembro del Partido de la U, del Partido Liberal y de Cambio Radical le ha traído la [reputación](#) de cambiar de alianzas y prioridades según le convenga. Sin embargo, también se ha proyectado como un [buen negociador](#) y ha desempeñado un papel fundamental en [la obtención de apoyos para](#) el programa del presidente Petro como presidente del Senado. Su [amplia experiencia política](#) y su capacidad para entablar [relaciones con políticos](#) con los que no necesariamente comparte creencias indican que probablemente sabrá manejar con habilidad los nombramientos en el gabinete. Barreras [ha criticado constantemente las reformas](#) con las que no estaba de acuerdo, incluso cuando trabajaba en el Gobierno del presidente Petro, lo que subraya su convicción sobre la necesidad de consenso y [cooperación entre los grupos políticos](#).

Consideraciones adicionales:

Es probable que Barreras abandone al presidente Petro si resulta elegido presidente, dadas sus diferencias en temas específicos y su historial de cambio de alianzas. Esta dinámica probablemente generará tensiones entre un Gobierno encabezado por Barreras y el presidente Petro en su futuro rol de expresidente. Gustavo Petro es consciente de esta probabilidad y, por ello, es poco probable que respalde la formación de una coalición liderada por Barreras. Barreras ha manifestado que [la consulta popular sobre la reforma laboral](#) del presidente Petro es innecesaria y agrava la polarización. Estas declaraciones reflejan un respeto por el equilibrio de poderes y un compromiso con la desescalada de tensiones entre partidos y ramas del poder público.

Actualmente, la Corte Suprema está [investigando](#) a Barreras por presuntos cargos de corrupción y soborno.



LOS CANDIDATOS DEL CENTRO:

Como analizamos en nuestro *Colombia Risk Monthly* #80 de mayo, el centro sufre por un gran número de candidatos y una falta de unidad, aunque ya están empezando a formarse las coaliciones para el Senado. Actualmente, Claudia López y Sergio Fajardo lideran las encuestas en el centro. Sin embargo, si no logran unificarse en torno a una sola candidatura, es probable que el voto se divida.

Los candidatos buscarán permanecer en la contienda el mayor tiempo posible, lo que debilita la fuerza de una potencial coalición detrás de una candidatura única. El centro se encuentra atrapado entre dos narrativas emocionales: por un lado, el antipetrismo de la derecha tradicional y, por otro, el «bloqueo institucional» y la incapacidad de gobernar, promovida por el Pacto Histórico y sus aliados. El centro está dividido internamente, con figuras inclinadas hacia la derecha que se suman a la retórica antipetrista. Al mismo tiempo, los miembros más moderados de la centroizquierda desean que se aprueben algunos de los cambios del presidente Petro, pero no a costa de la estabilidad económica y la escalada de divisiones. Sin establecer una plataforma clara que respalde una candidatura única, es poco probable que el centro pase a una segunda vuelta y, además, tiene pocas posibilidades de lograr un impacto político duradero.

Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, Paola Agudelo y Manuel Virgüez anunciaron el 24 de junio de 2025 la creación de una [coalición](#) de partidos de centro-derecha en el Congreso, la cual se presentará bajo el nombre de Ahora Colombia. El bloque incluye al Nuevo Liberalismo, el partido MIRA y Dignidad y Compromiso. La propuesta de la coalición se centra en la unidad y el diálogo, la lucha contra la corrupción y la seguridad, e incluye la presentación de una lista conjunta abierta al Senado. Sin embargo, cada partido actualmente busca competir de forma independiente en las elecciones presidenciales, eligiendo a sus propios candidatos.

El fracaso de [la coalición Centro Esperanza](#) de Fajardo y Galán para las elecciones de 2022 pone en duda la viabilidad de Ahora Colombia. Centro Esperanza tuvo dificultades para presentarse como una coalición unificada, ya que [las tensiones y las disputas](#) públicas entre sus miembros eclipsaron las propuestas políticas del movimiento. Además, tampoco logró presentar un nuevo candidato presidencial, ya que Fajardo fue elegido principalmente por su visibilidad, en lugar de por sus propuestas originales, y volvió a recurrir al mismo [discurso anticorrupción](#). Ahora Colombia tiene más posibilidades de éxito, al ser una coalición centrada en el Senado y con lineamientos ampliamente compartidos, pero aún enfrenta retos importantes. Mientras tanto, la candidatura presidencial de Galán muy probablemente suscitará una [consulta interpartidista](#) el 8 de marzo de 2026 para definir quién encabezará la coalición. Claudia López, por su parte, brilla por su ausencia en la coalición hasta el momento. Como señalamos en nuestro *Colombia Risk Monthly* #79, es poco probable que una coalición de centroizquierda incluya a Fajardo y López. En cambio, si llegara a consolidarse el «frente amplio», es más probable que lo integren figuras como Luis Gilberto Murillo o Juan Fernando Cristo, quienes han sido menos críticos del presidente Petro.





SERGIO FAJARDO

Sergio Fajardo cuenta con [una amplia trayectoria política](#), ya que anteriormente fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Esta será su tercera [candidatura](#) a la presidencia, lo que le ha brindado el apodo de «[el candidato eterno](#)». Ha sido criticado con frecuencia por su ambigüedad política y por no asumir posturas firmes frente a temas clave. Fajardo ha tratado de presentarse como un candidato no atado a partidos ni alianzas, con una visión más independiente. Aunque ese esfuerzo puede haberle costado la elección en 2018 y afectado sus posibilidades en 2022, refuerza su credibilidad de cara al futuro como alguien ajeno a los partidos tradicionales y menos propenso a formar alianzas por conveniencia. Sin embargo, si resulta elegido, esta distancia con los partidos tradicionales probablemente perjudicará sus posibilidades de aprobar leyes importantes con amplio apoyo en el Congreso.

Principales prioridades políticas:

El discurso central de la campaña de Fajardo se centra en la conciliación y el diálogo frente a la retórica incendiaria y la tensión institucional. Su visión para el próximo Gobierno busca reunir [a partidos](#) de todo el espectro político. Además, centra sus [prioridades](#) en la seguridad, la salud y la educación, en línea con su compromiso con [la educación](#) y la inclusión social en sus cargos anteriores. Su [propuesta de reforma a la salud](#) da prioridad a una mayor supervisión y a la imposición de sanciones a las EPS que no cumplan con sus objetivos, así como a su posible liquidación. Ha [criticado duramente la intervención del Gobierno en distintas EPS](#), acusando al presidente Petro de no haber prevenido la corrupción en la gestión de recursos. El candidato promueve una solución a la crisis de salud que sea económicamente viable, sostenible y con una visión de largo plazo.

Equipos y asesores potenciales:

Fajardo indicó que Juan José Chavarría, exgerente del BanRep, está asesorando a su [equipo económico](#). Juan Abel, quien fue su estrategia de comunicaciones en 2021, trabajó brevemente con Galán antes de regresar con Fajardo en 2022, y probablemente hará parte de su equipo en esta contienda. María Ángela Holguín, quien fue ministra de Relaciones Exteriores durante ocho años en el Gobierno de Santos, es muy probablemente quien lo asesora en temas de política exterior.

Alianzas potenciales:

La coalición Ahora Colombia garantiza que el partido de Fajardo, Dignidad y Compromiso, alcanzará el umbral necesario para competir en las elecciones y asegurarse representación en zonas donde tiene un alcance limitado. Lo más importante es que la coalición promete [apoyo legislativo](#) a Fajardo. Sin embargo, el fracaso de Fajardo a la hora de formar una coalición exitosa en las últimas elecciones, así como el fracaso de dos campañas presidenciales anteriores, amenazan la credibilidad de la alianza en este momento.

Consideraciones adicionales:

Para obtener apoyo electoral, Fajardo tiene que ofrecer algo nuevo a los votantes que diferencie esta candidatura de sus dos intentos anteriores. Aunque en el pasado no logró posicionarse como una figura fuerte contra el establecimiento, manteniéndose fiel a su enfoque algo ambiguo de la «política decente», es probable que su [fuerte retórica anti petrista](#) le genere algunos votos adicionales en este ciclo electoral. Además, Fajardo es muy consciente de que es un candidato «aburrido», porque su forma de hacer política es opuesta a la de los populistas; este enfoque podría jugar a su favor en un escenario post-Petro y post-Trump, en el que algunos votantes pueden estar hartos del populismo.

La falta de experiencia política reciente y de exposición pública, junto con dos campañas fallidas, probablemente reducirán la relevancia del candidato entre los votantes. Si bien sus campañas presidenciales han mantenido a Fajardo en el espacio político, su cargo público más reciente fue el de gobernador de Antioquia entre 2012 y 2016. Lo mismo ocurre con los demás líderes de la coalición: el último cargo público de Galán terminó en 2018, mientras que Robledo fue senador durante 20 años hasta 2022. Este panorama contrasta con el de Claudia López, que recientemente ocupó un cargo público destacado como alcaldesa de Bogotá hasta 2023, con [relativo éxito](#).

En el pasado, Fajardo se ha mostrado reacio a ceder en su postura para conseguir [el apoyo necesario en el Congreso y en las elecciones de segunda vuelta](#), lo que contribuyó a la ruptura de su coalición en 2022. Sin embargo, ya está [siendo criticado](#) en esta contienda electoral por alinearse con el partido cristiano MIRA, dadas sus diferencias en temas como el aborto, los derechos de las personas LGBTQ y la educación laica. La inclusión de MIRA en la coalición Ahora Colombia señala un cambio de estrategia. Fajardo probablemente se verá obligado a negociar en una segunda vuelta, lo que pondrá aún más en riesgo la integridad ideológica de su posición.





CLAUDIA LÓPEZ

Claudia López tiene una amplia experiencia política como ex congresista de la Alianza Verde y ex alcaldesa de Bogotá. López se registró oficialmente como candidata el 3 de junio de 2025 y se presentará como independiente mediante la recolección [de firmas](#). Su movimiento político se llama [Con Claudia somos imparables](#). La candidata fue inicialmente una partidaria firme del presidente Petro, pero se ha vuelto cada vez más crítica con sus políticas y su gestión, buscando distanciarse del actual Gobierno, como explicamos en detalle en el *Colombia Risk Monthly #80* de mayo. Este cambio de postura ha ido acompañado de importantes cambios en sus posiciones sobre la exploración de petróleo y gas, así como en la búsqueda de soluciones negociadas para el conflicto que vive Colombia.

Principales objetivos políticos:

López ha posicionado el restablecimiento [de la seguridad](#) ciudadana y la reforma [del sistema de salud](#) como dos objetivos prioritarios, junto con [la educación](#) y el empleo. La candidata ha hecho un llamado constante a poner fin a la impunidad de los grupos armados y ha expresado su intención de crear un nuevo [ministerio «antimafia»](#) o una [fiscalía](#) para combatir el crimen organizado. Este enfoque, agresivo contra la delincuencia, busca atraer a los votantes de derecha, diversificando su cartera de políticas para aumentar sus posibilidades electorales. Sin embargo, este cambio de postura puede desanimar a algunos votantes que creen que López no es sincera en sus posiciones, sobre todo después de que [reconociera](#) tácitamente que, en una segunda vuelta, necesitará los votos de la izquierda para ganar.

López propuso una [nueva forma de gobierno](#) compuesta por dos gabinetes, uno integrado por alcaldes y gobernadores territoriales y otro por ministros nacionales. Esta idea refuerza su llamada a la integración de los territorios en la gobernanza nacional. Para resolver la crisis energética, López ha manifestado su apoyo al [fracking](#), lo que supone un cambio de política significativo, y [respaldado](#) la exploración de nuevos yacimientos de gas y petróleo, además de abogar por las fuentes de energía renovables y [la diversificación](#). Para hacer frente al déficit fiscal, López ha afirmado que tratará de mejorar la eficiencia del Gobierno colaborando con los ministerios para agilizar la burocracia, en lugar de abogar por su cierre.

Para abordar la crisis sanitaria, López ha afirmado que Colombia necesita una reforma de alcance medio, en colaboración con las empresas de salud, que se centre en ajustar las ineficiencias en lugar de crear un nuevo sistema.

Equipos y asesores potenciales:

Según nuestras fuentes, su [comité](#) está formado por Nadya Rangel, actual secretaria de Vivienda de Bogotá, Alejandro Palacio Restrepo,

un destacado líder estudiantil, y el empresario Ignacio Pombo Villar. Miguel Samper es su asesor estratégico.

Alianzas potenciales:

Tras separarse de la Alianza Verde en 2024, López tiene la intención de presentarse mediante [firmas](#). Aunque en gran medida escapó [del escándalo de corrupción](#) del partido, esto significa que carece de los mecanismos partidistas necesarios para reunir apoyos. En su lugar, la campaña de López se basará en los votos de opinión, que probablemente se verán socavados por su anterior apoyo al presidente Petro.

Aunque es una figura visible en Bogotá gracias a su alcaldía, es menos conocida en las zonas rurales, lo que probablemente complicará su campaña. López se ha vuelto cada vez más [crítica](#) con el presidente Petro, por lo que es poco probable que forme una coalición con el candidato del Pacto Histórico en las primeras etapas de la contienda. Su mandato como alcaldesa de Bogotá fue controvertido, lo que la hizo [impopular](#) a los ojos de ciertos políticos y votantes, incluida la [derecha tradicional](#), atrayendo [las críticas](#) del expresidente Álvaro Uribe. En vista de ello, es altamente improbable que López obtenga [el apoyo suficiente en el Congreso](#) sin una coalición que la respalde.

Consideraciones adicionales:

Una de las políticas centrales de la candidatura de López es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Su campaña se financiará exclusivamente con donaciones de los ciudadanos. Como señalamos en el *Colombia Risk Monthly #80* de mayo, López no se ha visto envuelta en ningún escándalo de corrupción importante, lo que da legitimidad a sus propuestas. Sin embargo, compite con Fajardo por la plataforma anticorrupción en el centro.





JUAN MANUEL GALÁN

Juan Manuel Galán es el líder de Nuevo Liberalismo, un partido centrista fundado por su difunto padre, Luis Carlos Galán. Anteriormente fue senador por el Partido Liberal, antes de que este respaldara a Duque. Ha [anunciado oficialmente su intención](#) de presentarse como candidato presidencial de su partido.

Principales objetivos políticos:

Galán anunció que su primera decisión como presidente sería [renovar la exploración de gas y petróleo](#) en Colombia para evitar una crisis energética, garantizar una transición energética estable y recuperar la confianza de los inversores. También destaca la importancia de diversificar los recursos energéticos.

Galán ha criticado duramente la política de paz total del presidente Petro y, si es elegido presidente, es muy probable que adopte un enfoque más duro con los grupos armados, poniendo fin a las negociaciones y a las zonas desmilitarizadas. Recientemente, ha presentado un [recurso judicial](#) contra la creación de una nueva zona de paz en Tibú por parte del Gobierno, argumentando que facilita el fortalecimiento de los grupos armados e impide la extradición de individuos solicitados por Estados Unidos. También ha propuesto reforzar la policía con [empresas de seguridad privada](#) para mejorar la seguridad urbana y aumentar la capacidad de las prisiones. Este enfoque en seguridad se complementa con un reconocimiento de que [los problemas estructurales](#) impulsan la delincuencia. Galán destaca la necesidad de abordar la desigualdad, invirtiendo en infraestructura crítica como el acceso a Internet y las vías de transporte. Además, se ha mostrado abierto a [la legalización de la coca](#) como estrategia para debilitar la economía ilícita que impulsa la delincuencia violenta.

Galán apoya un [enfoque descentralizado](#) de la gobernanza que busca colaborar más estrechamente con los alcaldes y los funcionarios locales, especialmente en materia de seguridad, y propone una reforma del sistema de participación para acercar más a los territorios al Gobierno.

Equipos y asesores potenciales:

Fuentes sugieren que Galán cuenta con el asesoramiento de Sandra Borda, Omar Hoyos, Mabel Lara y Philipp Wodak, quien es secretario

general del Nuevo Liberalismo. Lara, periodista de profesión antes de dedicarse a la política, encabezó la lista del Senado por el Nuevo Liberalismo en 2022 antes de abandonar el partido para alinearse con el Pacto Histórico. Borda también figuraba en la lista del partido en 2022 y es probable que asesore en materia de relaciones exteriores.

Alianzas potenciales:

El Nuevo Liberalismo forma parte de la [coalicción legislativa Ahora Colombia](#), junto con el partido de Fajardo, Dignidad y Compromiso, y el partido cristiano MIRA. Aunque esto implica un apoyo multipartidista en el centro, si tanto Galán como Fajardo se presentan como candidatos presidenciales sin participar en una consulta interpartidista, es probable que la coalición se debilite. Galán [descartó una alianza con el Pacto Histórico y con la derecha](#), comprometiéndose con una propuesta «nueva» y «distinta».

Consideraciones adicionales:

El partido del Nuevo Liberalismo está fuertemente asociado con Galán y su hermano Carlos Fernando Galán, actual alcalde de Bogotá. Como alcalde, Carlos Fernando Galán proporciona a su hermano una plataforma adicional y un potencial apoyo electoral. En la consulta interpartidista del centro realizada en 2022, Galán quedó en segundo lugar detrás de Fajardo con [el 22 % de los votos](#), y obtuvo un apoyo significativo en Bogotá, lo que indica una base de apoyo pequeña, pero sólida. Es poco probable que Galán consiga captar la mayoría de votos del centro; sin embargo, la marca del Nuevo Liberalismo, junto con su probada capacidad para elegir a personas para el Congreso, supone una importante incorporación a la coalición. Es necesario comunicar al electorado lo que representa el Nuevo Liberalismo más allá del nombre y del liderazgo de los hermanos Galán, lo cual solo es posible mediante la creación de un movimiento sostenible.



LOS CANDIDATOS DE LA DERECHA:

La derecha está atomizada y, al momento de redactar este informe, no cuenta con un candidato fuerte. El Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U no tienen candidatos en la contienda, lo que deja el escenario libre para el Centro Democrático, Cambio Radical e independientes como Victoria Dávila. El Centro Democrático aún no ha decidido el mecanismo para elegir a su candidato. El intento de asesinato de Miguel Uribe ha ralentizado al proceso, y candidatos del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia [han suspendido](#) sus campañas tras el atentado.

Es muy probable que la intensificación de la violencia en [Cali](#) y el [Catatumbo](#), la [suspensión de las conversaciones de paz](#) con los grupos armados y el [intento de asesinato](#) del senador Uribe sigan siendo utilizados por la derecha tradicional y radical como evidencia [del fracaso del modelo de diálogo](#) para lograr la paz, y como argumento para justificar la urgencia de [una mayor inversión en la policía](#) y en la respuesta militar frente a los grupos criminales.

La falta de un candidato claro afecta la unidad y la consolidación de la campaña de la derecha para las elecciones. Cuanto más tiempo pase sin un candidato claro, menos probable será que su candidato gane una consulta interpartidista. Sin embargo, la puesta en marcha de dicho mecanismo aún no está confirmada. Además, [las dificultades legales](#) y la decreciente popularidad del expresidente y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, dejan a la derecha sin un líder fuerte. Sin embargo, en abril de 2025, los precandidatos del Centro Democrático pidieron a Uribe que se presentara como [candidato a la vicepresidencia o como cabeza de lista del partido para el Congreso](#). El mismo Uribe aclaró [que no tiene intención](#) de presentarse a la vicepresidencia y que es improbable que sea elegible. La influencia de Uribe en la elección de un candidato y en la dirección del Centro Democrático, y de la derecha en general, está disminuyendo. Es probable que una facción tradicional del Centro Democrático se agrupe en torno a él tras la conclusión del juicio, especialmente después de que el 28 de julio fuera declarado [culpable](#) de fraude procesal y manipulación de testigos, lo que fragmentará aún más a la derecha. A pesar de esta probabilidad, [Uribe convocó un foro en línea](#) a finales de julio de 2025 al que asistieron figuras de la derecha y de la centro-derecha. El debate se celebró para discutir la necesidad de restaurar la seguridad y construir la unidad democrática, aparentemente promoviendo una posible coalición amplia entre la derecha.

Victoria Dávila representa un desafío para el Centro Democrático. Sus críticas al actual Gobierno coinciden con el discurso antipetrista de los partidos tradicionales y cuenta con un perfil de alcance nacional del que carecen Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y otros candidatos de derecha. Según nuestras fuentes, Germán Vargas Lleras, que en un principio se consideraba una opción fuerte para la candidatura presidencial de la derecha, no se presentará a las elecciones presidenciales debido a problemas de salud. Ya hemos analizado en detalle la fragmentación de la derecha en nuestra edición de junio del *Colombia Risk Monthly* #81.

La pérdida de influencia de Uribe, junto con el atentado contra Miguel Uribe y el deterioro de la salud de Vargas Lleras, hacen que este ciclo electoral sea incierto para la derecha y que la elección de un candidato esté muy abierta. Esta situación brindará oportunidades para que candidatos externos como Mauricio Cárdenas, David Luna, Abelardo de la Espriella o Juan Carlos Pinzón lancen campañas exitosas.



Victoria Dávila se dio a conocer al público como periodista y directora de la revista [Semana](#). Con más de [cuatro millones de seguidores](#) únicamente en X, Dávila es la candidata independiente más conocida y cuenta con un gran número de seguidores como consecuencia de su crítica hacia los políticos, centrándose especialmente en denunciar [la corrupción](#). Las elecciones de 2026 son su primera incursión en la arena política. La candidata se presenta como candidata independiente, al frente del recién creado movimiento [Valientes](#).



**VICTORIA
DÁVILA**

Principales objetivos políticos:

La campaña de Dávila se centra principalmente en la economía. Para hacer frente al déficit fiscal, la aspirante a la presidencia ha declarado que eliminará [ministerios del Gobierno](#) para reducir el gasto público. También tiene previsto reducir las tasas impositivas. Su política exterior busca restablecer las relaciones con Estados Unidos e Israel, incluida la reapertura inmediata de [la embajada israelí](#). Además, se opone a la [firma de la Iniciativa de la Franja y la Ruta](#) debido a preocupaciones sobre arriesgar la relación de Colombia con Estados Unidos, y es muy crítica con el Gobierno chino. Al considerar que la paz total ha sido un [fracaso absoluto](#), Dávila ha declarado que pondrá fin a las negociaciones de paz y ha destacado la importancia de [Estados Unidos](#) en la lucha de Colombia contra los grupos armados.

Equipos y asesores potenciales:

Dávila anunció que [Alicia Arango](#), exministra de Trabajo bajo el mandato de Iván Duque, exsecretaria privada de Álvaro Uribe y, en un momento dado, directora del partido Centro Democrático, será su principal asesora de campaña y estrategia política. Algunos consideran que este nombramiento es indicativo del inevitable [respaldo de Uribe a Dávila](#). En cualquier caso, mantener a Arango cerca [pone en peligro](#) la identidad antisistema de Dávila.

Sandra Suárez, ministra de Medio Ambiente durante el primer mandato de Uribe y antigua [empleada de Semana](#) con [experiencia](#) importante en comunicación y liderazgo, se unió como su directora de campaña. [El equipo](#) económico de Dávila está compuesto por Axel Kaiser, Lisandro Juanco y Andrés Bernal Correa. [Kaiser](#), de ideología libertaria, fue asesor económico de la campaña presidencial de Milei. Tomando esto como indicador de las políticas económicas que Dávila impondrá para gestionar el déficit fiscal, algunas de sus sugerencias incluyeron la [eliminación de ministerios ejecutivos](#) y la reestructuración del poder ejecutivo para reducir los costos derivados de la burocracia y la ineficiencia. De todos los candidatos analizados, Dávila ha sido la que ha presentado el equipo de asesores más completo, explicado por su inexperiencia en asuntos públicos y sus esfuerzos por complementarla

con figuras experimentadas. Sin embargo, no está claro si los asesores son cargos remunerados o si colaboran de forma voluntaria, lo que en última instancia podría dar lugar a investigaciones en caso de que ganara la presidencia.

Alianzas potenciales:

Dávila se presenta como independiente y actualmente recoge firmas para asegurar su candidatura. [Se niega](#) a caracterizar su ideología y se presenta como una candidata del pueblo. Es poco probable que consiga el apoyo suficiente sin formar una coalición; la llegada de Arango y Suárez es indicativa de un cierto alineamiento ideológico con el Centro Democrático. Desde el atentado a Miguel Uribe, se ha [asociado](#) más con la derecha tradicional, participando en la convocatoria a la marcha con miembros del Centro Democrático y del Partido de la U. Si Dávila mantiene su posición como la candidata de derecha más popular en las encuestas, existe la posibilidad de que sea elegida para enfrentarse a un candidato del «frente amplio» de la izquierda. Sin embargo, para el nivel de reconocimiento nacional que tiene, una intención de voto del 11 % en las encuestas es baja en este momento de la campaña.

Consideraciones adicionales:

Aunque Dávila se ha rodeado de asesores políticos experimentados, carece de trayectoria política práctica y de gestión de grandes burocracias, salvo en la revista Semana. Como candidata independiente y sin experiencia previa, tampoco cuenta con una estructura partidaria, lo que le dificultará obtener apoyo en las regiones y crear alianzas en el Congreso.

Otro motivo de preocupación es la larga relación de Dávila con el grupo Gilinski, el propietario de Semana, que tiene importantes intereses económicos en múltiples sectores de Colombia, entre ellos las finanzas, el comercio minorista y la producción alimentaria. La candidata pretende llevar a cabo una campaña transparente y pública y ha declarado [que revelará](#) todos sus donantes. Se espera que Gabriel Gilinski sea uno de los donantes de la campaña de Dávila, aunque ella insiste en su [independencia](#).



María Fernanda Cabal es actualmente senadora y miembro fundadora del Centro Democrático. Tiene posturas más [extremas](#) que otros candidatos del Centro Democrático en materia de paz y seguridad, economía y política exterior. Cabal apoya las políticas culturales del presidente estadounidense Trump, los enfoques radicales del presidente argentino Milei para reducir el gasto público y la línea dura del expresidente Uribe para hacer frente a los grupos armados, las organizaciones de narcotráfico y otros grupos criminales.



**MARÍA FERNANDA
CABAL**

Principales objetivos políticos:

Una prioridad central de la candidatura de Cabal es la seguridad. Ha respaldado el fin de las negociaciones con todos los grupos armados y el retorno a una política de seguridad similar al [plan de «seguridad democrática»](#) del Gobierno de Uribe (2002-2010), que incluía [grupos de vigilancia](#) cooperativos comunitarios. Como admiradora de la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, Cabal promovió la construcción de un [sistema penitenciario](#) mediante asociaciones público-privadas y la erradicación de los cultivos de coca mediante métodos de erradicación forzosa, incluida [la fumigación aérea](#). Al no diferenciar su propuesta de seguridad del enfoque de Uribe, Cabal corre el riesgo de presentar un programa que promueve un retorno al pasado, lo cual es menos probable que resulte atractivo para los votantes.

En respuesta a los desafíos económicos, Cabal afirmó que el déficit fiscal debe abordarse mediante el cierre [de ministerios](#) y órganos consultivos del Gobierno y propuso un [plan para reducir los precios del combustible](#) para los consumidores, abriendo el mercado a la inversión privada con el fin de debilitar el monopolio del combustible que ostentan Ecopetrol y Reficar. Para resolver la crisis energética, Cabal respalda el fracking y tiene la intención de derogar la prohibición de nuevas exploraciones de combustible.

Equipos y asesores potenciales:

Cabal aún no ha anunciado su equipo presidencial; sin embargo, no es improbable que miembros de su equipo en el Senado, como Ana Milena Zambrano, ocupen cargos de asesoría. También es altamente probable que Cabal trabaje en temas de seguridad junto a otros miembros de línea dura del partido, como Paola Holguín.

Alianzas potenciales:

Aunque Cabal ha propuesto al expresidente y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, como su candidato a la vicepresidencia para las elecciones de 2026, esto es muy poco probable. En cambio, es mucho más probable que quien quede en segundo lugar en una potencial consulta dentro de la coalición de derecha se convierta en su vicepresidente. Cabal también formalizó una alianza con [Christian Garcés](#), asegurando un voto unificado para el Centro Democrático

en Cali y el Valle del Cauca, así como su apoyo a su candidatura presidencial.

Consideraciones adicionales:

La campaña de Cabal se basa en gran medida en un discurso antipetrista, en el que la senadora [critica](#) repetidamente al actual Gobierno por sus fracasos, especialmente en materia de seguridad; sin embargo, la preocupación de la candidata por el antipetrismo y la seguridad limita su propuesta. El discurso de Cabal tiene que ir más allá de estas cuestiones para abarcar de forma creíble otras preocupaciones importantes para los votantes. Además, es muy probable que la estrecha relación de Cabal con el presidente Trump y su apoyo abierto a sus políticas comprometan su atractivo en las elecciones generales, dada la amplia desaprobación del presidente Trump entre los colombianos.

Es importante destacar que Cabal cuenta con el respaldo de una estrategia mediática integral, impulsada por APN Noticias y su propia cuenta de X. APN Noticias fue cofundada en 2023 por Ana Milena Zambrano y Luisa Fernanda Gómez, asesoras de Cabal en el Senado. En una [investigación realizada](#) en 2024, Cuestión Política descubrió que la gran mayoría de la producción de APN Noticias critica al Gobierno de izquierda o promueve la política de seguridad democrática, recurriendo a una estrategia de desinformación.

Como abordamos en nuestro *Colombia Risk Monthly #81* de junio, existen tensiones entorno al proceso de nominación del candidato para el Centro Democrático. Como miembro fundadora del partido, Cabal se considera una opción natural para la candidatura presidencial, especialmente después de haber sido descartada en 2018 y 2022 tras encuestas internas. Cabal ha promovido la realización de una consulta abierta para definir al candidato del partido en 2026. Cabal tiene vínculos familiares con el sector agroindustrial colombiano y participa en la labor de la [Fundación Colombia Ganadera](#) (Fundagán), el brazo social de Fedegan, el mayor sindicato de ganaderos de Colombia, que dirige su marido. Si bien esto le da visibilidad y apoyo en las zonas rurales, Fedegan fue acusada de [presionar a sus miembros](#) para que votaran por Cabal en su candidatura al Senado en 2022, aunque han negado las acusaciones.



Mauricio Cárdenas es un economista con amplia experiencia política, que ha sido ministro de Desarrollo Económico con el presidente Gaviria, ministro de Minas y Energía y [de Hacienda](#) durante el Gobierno de Santos, y ministro de Transporte y [director de Planificación](#) en el Gobierno de Pastrana. También ha formado parte de [las juntas directivas de diversas entidades](#), entre las que destacan la Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol. Además, ha sido asesor externo de bancos de inversión y otros inversores extranjeros en Colombia. Cárdenas, miembro de toda la vida del Partido Conservador, se presentará como candidato independiente con el apoyo de su movimiento [Avanza Colombia](#).



**MAURICIO
CÁRDENAS**

Principales objetivos políticos:

Las dos principales prioridades políticas de Cárdenas son la economía y la seguridad. Para hacer frente al déficit fiscal, Cárdenas propuso recortar el gasto público en COP [70 billones](#) (USD 16.7 millones), con el cierre de ministerios gubernamentales como la UNGRD, Fonseca y el Ministerio de Igualdad. Cárdenas [criticó fuertemente la suspensión de la regla fiscal](#) y es probable que intente restablecerla si es elegido presidente. Su exitosa gestión como ministro de Hacienda añade credibilidad a sus propuestas económicas. En materia de seguridad, Cárdenas declaró que pondría [fin de inmediato a las negociaciones](#) con todos los grupos armados y eliminaría las zonas desmilitarizadas, ordenando a las fuerzas armadas retomar el control territorial. Esta postura refleja un enfoque militarizado de la seguridad y supone una ruptura clara con la paz total del presidente Petro.

Equipo y asesores potenciales:

[El equipo de campaña](#) de Cárdenas está formado por Ángela María Orozco y Fernando Jiménez, quienes ocuparon los cargos de ministra de Transporte y viceministro de Finanzas, respectivamente, en el Gobierno de Duque. Es probable que estos nombramientos atraigan un mayor apoyo de tecnócratas y figuras destacadas del mundo empresarial.

Alianzas potenciales:

Cárdenas se ha mostrado abierto a diversas alianzas y coaliciones. Aunque se ha registrado como candidato independiente, cuenta [con el apoyo del Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical](#). Cárdenas ha declarado que desea participar en una consulta interpartidista en marzo de 2026 para construir una amplia coalición de oposición al Pacto Histórico. Ha indicado que [aceptaría el apoyo del uribismo](#) en una segunda vuelta.

Consideraciones adicionales:

Cárdenas carece de un perfil nacional; [el 78 % de los colombianos](#) no sabe quién es el exministro, según la última encuesta de Invamer. Este bajo perfil público le beneficia, ya que es menos probable que se le asocie con algún escándalo; sin embargo, frente a los candidatos con alta visibilidad nacional, como Bolívar, su escasa visibilidad le perjudica. La fortaleza de Cárdenas proviene de su amplia experiencia, especialmente en funciones centradas en la economía, y de sus conexiones en el espacio político de derecha.

¿CUÁLES SERÁN LAS POSTURAS DE LOS CANDIDATOS?

- MUY PROBABLE
- PROBABLE
- POCO PROBABLE

	Gustavo Bolívar	María José Pizarro	Roy Barreras	Sergio Fajardo	Claudia López	Juan M. Galán	Maria F. Cabal	Victoria Dávila	Mauricio Cárdenas
¿Su relación con el congreso estará marcada por tensiones y presiones?									
¿Buscará una salida negociada al conflicto?									
¿Buscará diversificar los socios tradicionales de Colombia?									
¿La gestión fiscal será una prioridad?									
¿Mantendrán la prohibición de la exploración y se centrarán en las energías renovables?									
¿La corrupción será una prioridad?									
¿Se centrarán en reformas socialmente progresistas?									



ENFOQUE: EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONTIENDA ELECTORAL

La campaña electoral se desarrollará en gran medida en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, X, Instagram, WhatsApp y Facebook. [El éxito del senador Jota Pe Hernández](#), elegido en las elecciones legislativas de marzo de 2022, y la sorprendente fuerza electoral de [Rodolfo Hernández](#) en las subsecuentes elecciones presidenciales demuestran la influencia de las redes sociales en los resultados electorales. Ambos candidatos llevaron a cabo intensas campañas en las redes sociales para acumular apoyos. Aunque ni la derecha ni el centro pueden igualar el liderazgo digital del presidente Petro, Victoria Dávila es la candidata presidencial con mayor presencia en Internet, gracias a su consolidada imagen pública tras su carrera en Semana. Después de Dávila, Gustavo Bolívar, Sergio Fajardo y Daniel Quintero son los más [virales](#), y como se ha mencionado anteriormente, Cabal cuenta con el apoyo de APN Noticias.

El presidente Petro ha creado una maquinaria propagandística bien financiada, compuesta por sus propias cuentas en redes sociales y los [medios de comunicación estatales](#), a través de la cual busca moldear la opinión pública. Bajo el mandato del presidente Petro y el liderazgo de Hollman Morris, el Sistema de Radio y Televisión de Colombia (RTVC) ha pasado de ser una fuente de noticias predominantemente neutral a otra que [apoya de forma abrumadora al Gobierno](#). [Los influencers](#) de todo el panorama político también desempeñan un papel fundamental en las campañas en línea, algunos de ellos respaldados o financiados por el Estado, los partidos políticos o [los políticos](#) mismos y por actores privados. El patrocinio de influencers es especialmente importante cuando un candidato tiene poca presencia en Internet. El hecho de no revelar cuándo se paga a un influencer para que respalde o critique a un candidato suscita [preocupación por la transparencia](#) y el potencial impacto en las intenciones de voto.

Nuestro próximo informe, «El futuro de los medios de comunicación estatales en Colombia», se publicará en agosto de 2025 y analizará estas cuestiones con mayor profundidad. Prevemos dos medidas potenciales que adoptaría la próxima Administración: en primer lugar, seguir promoviendo la propaganda progubernamental en RTVC y en los medios de comunicación públicos; y la segunda, menos probable, recortar la financiación de los medios de comunicación públicos y, potencialmente, del canal RTVC. Este segundo escenario es más probable bajo un Gobierno de derecha que priorice la reducción del gasto público. También existe el riesgo de que los medios de comunicación públicos se conviertan en un foco de desinformación.

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió en junio de 2025 que el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial en las campañas amenaza la [integridad de las elecciones](#) al fomentar la desinformación y la polarización. Este problema se verá agravado por la prohibición oficial de las encuestas hasta octubre de 2025. La MOE pidió una mayor supervisión digital y un mayor control de los contenidos por parte del CNE, algo poco probable dadas las limitaciones presupuestarias de este organismo. La desinformación es motivo de preocupación si se tiene en cuenta que el 25 % de los colombianos confía mucho en las noticias de las redes sociales y dos tercios confían parcialmente, lo que supone [el segundo porcentaje más alto de los países estudiados](#). La suspensión del servicio de [verificación de datos en las plataformas de Meta](#) en enero de 2025 ha reducido la supervisión, dejando esta tarea a una red de verificación relativamente pequeña en Colombia, formada por [Colombiacheck](#), el «Detector de Mentiras» de La Silla Vacía y [RedCheq](#). Es casi seguro que la desinformación impregnará el discurso en línea en torno a las elecciones y es probable que empeore a medida que se acerque la fecha de las elecciones.

¿CÓMO PARTICIPARÁ EL SECTOR PRIVADO EN ESTE CICLO ELECTORAL?

El sector privado suele interactuar con el proceso electoral a través de asociaciones comerciales o instituciones financieras, y de tres maneras principales. En primer lugar, se desempeña mediante el cabildeo directo en el Congreso para apoyar a sus



candidatos preferidos. En segundo lugar, interactúa mediante la celebración de conferencias u otros eventos de carácter público, invitando a los candidatos y a los miembros del Congreso a hablar con los electores y a elevar su perfil, y excluyendo a otros para reducir su visibilidad. Un ejemplo destacado es la [Conferencia Bancaria](#) organizada por la Asociación Bancaria en Cartagena, celebrada este año del 4 al 6 de junio. En tercer lugar, contribuye directamente a la financiación de la campaña de un candidato. La financiación de las campañas se realiza mediante donaciones directas de las empresas, aunque, dado el [límite de gasto](#), las empresas también apoyan a los candidatos a través de terceros. La financiación irregular de la campaña de un candidato por parte de actores privados conlleva riesgos legales y de reputación, como se vio en el caso de Odebrecht, que aportó [fondos ilegales a la campaña presidencial](#) de Juan Manuel Santos en 2010.

Dada la retórica incendiaria del presidente Petro hacia el sector privado, esperamos que las empresas nacionales y extranjeras afectadas por la política del Gobierno participen activamente en el apoyo a la oposición en esta contienda electoral. El presidente ha criticado al sector empresarial por [no apoyar su reforma laboral](#), ha acusado a las empresas energéticas de [mala gestión financiera](#), ha entablado litigios [internacionales](#) con empresas sanitarias y ha amenazado al sector bancario con [inversiones forzadas de sus activos](#), entre muchas otras acciones.

En Colombia Risk Analysis, [creemos](#) que el sector privado debe diversificar su enfoque hacia la política pública mediante inversiones en instituciones como tanques de pensamiento y otras entidades generadoras de políticas para ampliar su participación en la política colombiana. Los tanques de pensamiento están muy poco desarrollados en América Latina, y hay espacio y demanda para una mayor participación de los actores existentes en este ámbito, así como para una mayor inversión en la investigación sobre asuntos políticos nacionales e internacionales.

SECCIÓN 3: ¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS?

Un obstáculo clave para la próxima Administración, independientemente del resultado de las elecciones, será navegar las limitaciones impuestas por la situación económica. [El déficit fiscal](#) y el probable agotamiento de las finanzas públicas por parte del Gobierno Petro impondrán restricciones significativas al gasto público en el corto plazo, lo que exigirá una reducción del gasto público. Es probable que el Gobierno tenga que equilibrar este déficit con las expectativas generalizadas sobre los beneficios prometidos por las [reformas aprobadas](#) durante el mandato del presidente Petro, cuya implementación requiere planes de ejecución concretos y [costosos](#) a mediano plazo. Es probable que la falta de una aplicación eficaz de estas reformas provoque un descontento popular considerable.

En caso de que la izquierda pierda las elecciones, es muy probable que el presidente Petro y sus seguidores más cercanos impongan dificultades a una presidencia de centro-derecha o derecha, especialmente al comienzo de su mandato. Entre estos esfuerzos se incluyen cuestiones como no reconocer los resultados de las elecciones, en caso de que sean contrarios a sus intereses, o promover protestas generalizadas de trabajadores y estudiantes. Es probable que el Pacto Histórico logre una representación considerable en el Congreso, incluso si no gana la presidencia, lo que complicará la capacidad de un Gobierno de derecha para gobernar con eficacia. Es probable que los senadores del Pacto Histórico intenten bloquear el paso de la legislación.



El presidente Petro probablemente seguirá expresándose en las redes sociales con el objetivo de desacreditar al nuevo presidente, cuestionar las decisiones del nuevo Gobierno y sembrar división. Aunque es probable que el mensaje de Petro pierda influencia con el tiempo, a corto plazo existe una gran posibilidad de que las tensiones y la retórica incendiaria den lugar a protestas a su favor y en contra de un Gobierno de derecha. El Gobierno del momento tendrá que abordar este descontento social en un momento crítico, mientras intenta mantener una mayoría viable en el Congreso.

QUÉ ESPERAR DE UNA PRESIDENCIA DE IZQUIERDA:

Una presidencia de izquierda tendrá la tarea de implementar las reformas que se han aprobado con éxito durante la Administración Petro, más concretamente la reforma [laboral](#) y la [pensional](#). Además, es probable que intente aprobar e implementar reformas al [sistema de salud](#) de Colombia, un proyecto que ha estado buscado materializar durante al menos tres años y que es poco probable que se apruebe en lo que resta del mandato del presidente Petro. Es probable que la reforma convierta el sistema de salud en uno público, eliminando o modificando drásticamente el papel de las empresas intermediarias de seguros médicos que actualmente gestionan y distribuyen los recursos.

Es probable que un presidente de izquierda continúe cuestionando la independencia de algunas instituciones, como el Banco de la República, los tribunales y el Congreso. Un segundo Gobierno de izquierda dotará al Gobierno de la capacidad de reemplazar a más miembros del Banco de la República, nombrar nuevos magistrados para los tribunales superiores y designar nuevos líderes de instituciones independientes que velan por la democracia en Colombia, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

En materia de seguridad, es probable que una presidencia de izquierda modifique su enfoque [incorporando más respuestas militares](#). Sin embargo, seguirá manteniendo el diálogo con los grupos armados, en consonancia con la política de paz total. También es probable que dé prioridad a la reforma agraria, continuando con [la redistribución de tierras](#) del Gobierno Petro.

Es probable que una presidencia de izquierda busque estrechar aún más los lazos con Venezuela y Cuba como socios económicos y políticos, algo que el Gobierno del presidente Petro ha intentado hacer de forma discreta y por vías más pragmáticas, como silenciar la narrativa sobre el colapso económico de Venezuela, buscar la adquisición de activos estatales venezolanos a través de Ecopetrol o recibir médicos cubanos en Colombia. También es probable que favorezca la alineación ideológica con otros gobiernos de izquierda como México, Brasil, Chile y Nicaragua, mientras en esos países continúen los gobiernos progresistas.

Obstáculos

Es muy probable que una presidencia de izquierda sin mayorías en el Congreso se enfrente a los mismos problemas que el Gobierno actual, con los partidos de la oposición bloqueando la legislación. Es muy probable que la creación de [Unitarios](#), así como la [pérdida de los escaños de paz](#), reduzca el número total de escaños en la legislatura que apoyan al Pacto Histórico y sus políticas. Es probable que el discurso del [«bloqueo institucional»](#) sea menos eficaz en un segundo mandato, provocando una pérdida de apoyo popular a largo plazo. No es improbable que, en este escenario, un Gobierno de izquierda vuelva a recurrir a [mecanismos de democracia directa](#), como consultas populares o la movilización social. La realización de una [asamblea constituyente](#) será menos probable, dada la probabilidad de su fracaso, como ocurrió en [Chile](#). Sin embargo, es probable que estas propuestas sean menos efectivas, debido a que ya no vendrían directamente del presidente Petro, quien ha mantenido un nivel de apoyo significativo durante su mandato.



La aplicación de las reformas será complicada por las restricciones fiscales y [la oposición de grupos](#) determinados. En particular, es muy probable que una reforma a gran escala del sistema de salud se enfrente a [dificultades financieras](#) y administrativas, ya que el Gobierno se convertirá en el único administrador del sistema, aumentando el riesgo de interrupciones a su funcionamiento e incluso su colapso. Los cambios al sistema de las EPS cuentan con un fuerte rechazo de la derecha tradicional y de facciones del sector empresarial. Además, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) está preparando una [impugnación legal](#) de la reforma. Es probable que esta se enfrente a una gran resistencia.

Es probable que la situación de seguridad en Colombia empeore en los próximos 12 meses, especialmente ante la [suspensión de la asistencia y financiación militar de EE. UU.](#) prevista para finales de este año. Es probable que el aumento continuo de [la violencia contra la población civil](#) o los ataques de grupos armados contra las fuerzas militares en 2026 obliguen incluso a una presidencia de izquierda a adoptar un enfoque más duro contra los delitos violentos o a arriesgarse a perder aún más apoyo popular. Sin embargo, es poco probable que una presidencia de izquierda abandone por completo [la política de paz total](#), ya que ello supondría admitir su fracaso. También es probable que un presidente de izquierda intente presentar la oposición a sus políticas de seguridad como un golpe de Estado perpetrado por militares retirados, el sector privado y la oposición en general.

QUÉ ESPERAR DE UNA PRESIDENCIA DE CENTRO:

Una de las principales prioridades políticas de una presidencia centrista será [la reforma a la salud](#). Dudamos que una presidencia centrista haga que el sistema sea totalmente público. En lugar de una reforma drástica del sistema, es probable que un enfoque centrista colabore con las empresas sanitarias para lograr un sistema más eficiente, liquidando los EPS que no funcionan bien y dando prioridad al flujo de recursos hacia hospitales en riesgo de cierre. Es probable que este plan requiera garantías significativas de que el Gobierno no intervendrá en las nuevas empresas y que realizará los pagos oportunos así como aumentos a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del Gobierno central. La UPC es el pago per cápita que el Gobierno colombiano proporciona a las aseguradoras de salud para cubrir los servicios de atención médica de sus afiliados.

En materia de seguridad, es probable que un Gobierno centrista continúe con un proceso de paz más estructurado, equilibrando las medidas de incentivos y sanciones. Sin embargo, cualquier enfoque de paz probablemente dependerá de que los grupos armados demuestren una voluntad política genuina, lo cual es poco probable que ocurra con las diferentes organizaciones, en particular [con el ELN](#). También es poco probable que continúen los procesos de paz urbanos con las bandas criminales y otros grupos armados; en su lugar, es probable que el Gobierno invierta recursos en la seguridad urbana.

Un Gobierno centrista deberá respetar la independencia de instituciones como el Banco de la República y los tribunales. No podrá reducir unilateralmente la tasa de interés ni descartar inversiones futuras para dar cabida a ajustes fiscales. Para resolver la [crisis fiscal](#), es probable que un Gobierno centrista busque [racionalizar la burocracia](#) con el fin de reducir la ineficiencia del gobierno y [recortar el gasto](#), en lugar de recurrir a la eliminación de múltiples ministerios.

Obstáculos

La solidez de la coalición gobernante determinará la facilidad con la que un Gobierno centrista podrá aprobar leyes en el Congreso. Es altamente improbable que una presidencia centrista cuente con el apoyo de la mayoría del Congreso, por lo que deberá negociar y formar coaliciones entre partidos.



El último Gobierno centrista terminó en 2018, lo que implica que hay menos personas con experiencia reciente en cargos públicos. La formación de coaliciones con miembros del Congreso de izquierda o derecha probablemente requerirá que el centro renuncie a algunas de sus promesas electorales, lo que dejará al Gobierno expuesto a las críticas y al riesgo de perder el apoyo de los votantes. La naturaleza inestable de sus mayorías, que probablemente no se mantendrán a largo plazo, reduce la probabilidad de que un Gobierno centrista cumpla su mandato.

A la luz de la importancia de los discursos anticorrupción en el discurso político del centro, el nombramiento de cualquier figura acusada de corrupción suscitará críticas, complicando aún más la formación de un gabinete viable con suficiente experiencia, dada la naturaleza persuasiva de [la corrupción](#) en [la política](#) colombiana.

QUÉ ESPERAR DE UNA PRESIDENCIA DE DERECHA:

Las principales decisiones políticas de una presidencia de derecha se centrarán en [la seguridad](#), el [déficit fiscal y las perspectivas económicas](#), [la sanidad](#) y la [crisis energética](#). El enfoque en materia de seguridad pondrá fin a la paz total y probablemente se asemejará a [la política de «seguridad democrática» de Uribe](#), la cual dio prioridad al fortalecimiento del Ejército y al fin de las conversaciones de paz con todos los grupos. No es improbable que una presidencia de derecha presione para lograr un nuevo plan de cooperación con Estados Unidos tras la potencial [descertificación](#). A pesar de ello, es poco probable que la Administración Trump se muestre generosa con un nuevo Gobierno de derecha sin exigir primero concesiones significativas en materia de comercio y política exterior.

Para hacer frente a la crisis fiscal, es probable que una presidencia de derecha se centre en fomentar la inversión y reducir el gasto público en servicios. Es probable que esta estrategia implique el cierre de varios ministerios, empezando por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Para impulsar la economía y aumentar los flujos de dinero, es probable que la política económica se centre en la infraestructura y en la revitalización de los proyectos de construcción.

Es probable que una presidencia de derecha derogue la [prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas](#) y permita [el fracking](#) para hacer frente a la crisis energética, con el fin de aumentar las reservas de combustible de Colombia. Esta medida no estará exenta de oposición; es probable que la izquierda impugne legalmente cualquier intento de restablecer la producción de petróleo y gas y trate de fomentar el malestar social en las zonas donde se desarrollen estas operaciones. Además, según una de nuestras fuentes, es muy probable que se intente aprobar un esquema de consultas populares aceleradas para agilizar la concesión de permisos de fracking. Un antiguo funcionario del Gobierno, que habló bajo condición de anonimato, incluso sugirió que Colombia debería retirarse del Convenio 169 de la OIT, que otorga a las comunidades indígenas y afrocolombianas derechos de consulta previa. Los miembros de la derecha consideran que este convenio obstaculiza indebidamente la puesta en marcha de nuevos proyectos. El actual sistema de regulación de permisos es muy lento. Sin embargo, es probable que este proceso se enfrente a una oposición generalizada y a complicaciones de procedimiento, ya que cambiar el sistema requiere una consulta.

Los candidatos de derecha probablemente darán prioridad a [las relaciones bilaterales con Estados Unidos](#) e [Israel](#) frente a [un mayor compromiso con China](#). Un candidato de derecha con un enfoque centrado en la seguridad probablemente logrará mejorar [sus relaciones personales con el presidente de Estados Unidos](#) a corto plazo. Sin embargo, no es impensable que, dadas [las tensiones en Oriente Medio](#), Estados Unidos sea menos propenso a dar prioridad a la cooperación militar con Colombia.



Obstáculos

A corto plazo, es probable que las negociaciones pasen a un segundo plano en la política de seguridad de un Gobierno de derecha, debido a la percepción de [fracaso del enfoque centrado en el diálogo](#). Sin embargo, la dependencia institucional en materia de seguridad implica que el cese de las negociaciones conlleva el riesgo de un aumento de la violencia a corto plazo. Es probable que, dada la falta de recursos suficientes para una estrategia de mano dura frente a la inseguridad, incluso un Gobierno de derecha termine incorporando las negociaciones en su política de seguridad a largo plazo. Además, un retorno abrupto a un enfoque de mano dura que carece de garantías sociales probablemente provocará advertencias y acusaciones de [violaciones de los derechos humanos](#), lo que suscitará críticas por parte de la opinión pública y la oposición, e incluso de los círculos internacionales.

Es probable que el presidente Petro y sus seguidores reaccionen a esta política con fuertes denuncias, acusando potencialmente al Gobierno de devolver al país a la «guerra». Existe la posibilidad de que el presidente Petro recurra a vías legales nacionales o internacionales para demandar al Gobierno por no cumplir el acuerdo de paz. En este escenario, es probable que la Administración entrante responda con acusaciones de guerra judicial. Es poco probable que una política militar de derecha que ponga en peligro el acuerdo de paz provoque muchas críticas por parte de Estados Unidos; sin embargo, es más probable que se vea cierta preocupación por parte de los países latinoamericanos de izquierda y de los socios europeos. Sin embargo, en última instancia, dada la disminución general de la preocupación internacional por los asuntos internos, es probable que Colombia se encuentre sola en esta cuestión.

SECCIÓN 4: PRONÓSTICOS ELECTORALES

La campaña electoral de 2026 probablemente se caracterizará por una reconfiguración de las fuerzas políticas a medida que se van formando nuevas coaliciones, se consolidan los movimientos y los individuos abandonan sus partidos para presentarse de forma independiente. El número históricamente elevado de candidatos, así como la falta de candidatos claros dentro de los movimientos de izquierda, centro y derecha, hace que la contienda sea abierta e incierta.

Hay tres fechas clave que serán decisivas para el desarrollo de las elecciones: las consultas internas de los partidos, previstas para octubre de 2025, la presentación de las listas de candidatos al Congreso por los partidos, el 8 de diciembre de 2025, y las elecciones legislativas y las primarias entre partidos, previstas para el 8 de marzo de 2026. El resultado de las consultas internas determinará el alcance y la naturaleza de la transferencia de votos entre candidatos, así como la capacidad de estos para demostrar cómo su base de apoyo contribuye a su fuerza en el Congreso durante los próximos cuatro años.



NÚMERO DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Julio 2025

Posibles candidatos

75 POSIBLES CANDIDATOS

75 POSIBLES CANDIDATOS										Abelardo de la Espriella	Alberto Lizarazo	Alejandro Gaviria	Álvaro Pardo	Ángel Custodio
Andrés Guerra	Aníbal Gaviria	Armando Villegas	Camilo Romero	Carlos Caicedo	Carolina Corcho	César Pinzón	Claudia Fernández	Claudia López	Dagoberto Santoya					
Daniel Palacios	Daniel Quintero	Danny Becerra	David Luna	Enrique Peñalosa	Ernesto Sánchez	Estefanía Arenilla	Esau Jackson	Fabio Forero	Felipe Córdoba					
Francisco Barbosa	Germán Vargas	Gustavo Bolívar	Héctor Olimpo	Iván Cepeda	Jaime Araujo	Jaime Pumarejo	Jhon Jair Segura	John Mosquera	Jorge Rojas					
Jose Gamba	José Vargas	Josue Martínez	Jota Pe. Hernández	Juan C. Cárdenas	Juan C. Saldarriaga	Juan D. Oviedo	Juan G. Zuluaga	Juan Gómez	Juan M. Galán					
Juan Toro	Juan Torres	Leonardo Huerta	Luis Carlos Reyes	Luis Gilberto Murillo	Luz María Zapata	Maria C. Lacouture	Maria F. Cabal	María José Pizarro	Martha Bernal					
Maurice Armitage	Mauricio Cárdenas	Mauricio Lizcano	Miguel Pretel	Miguel Uribe	Mihaly Flandorffer	Neys Santana	Paloma Valencia	Paola Holguin	Pedro Díaz					
Pierre Onzaga	Ricardo Pérez	Roy Barreras	Ruben Dario Lizarralde	Santiago Botero	Sergio Fajardo	Sondra Macollins	Susana Muhamad	Victoria Dávila	Wilson R. Orejuela					

8 Diciembre, 2025

Plazo para inscribir las listas de candidatos al congreso

SE REDUCE A 20 CANDIDATOS



8 Marzo, 2026

Elecciones al Congreso y elecciones para coaliciones entre partidos

SE REDUCE A 8 CANDIDATOS



31 Mayo, 2026

Primera vuelta de las elecciones presidenciales

SE REDUCE A 2 CANDIDATOS



21 Junio, 2026

Segunda vuelta de las elecciones presidenciales

PRESIDENTE



Fuente: Guarumo, EcoAnalítica, Misión de Observación Electoral



Anticipamos que la participación electoral en las elecciones presidenciales de 2026 se mantenga por encima de la media histórica, continuando [la tendencia al alza](#) observada en las últimas encuestas. Es probable que las elecciones estén marcadas por la polarización, lo que aumentará la probabilidad de una mayor participación en la segunda vuelta. Una primera vuelta reñida también incrementará la participación en la segunda vuelta y transmitirá a los votantes que su participación es crucial para el resultado.

EN CASO DE UNA VICTORIA DE IZQUIERDA

Una victoria de la izquierda, especialmente si es con una amplia mayoría, provocará protestas y difamaciones por parte de la oposición, en particular de los partidos de derecha. Es probable que la oposición presione para que el Gobierno estadounidense recorte las ayudas e imponga sanciones, y que ejerza una fuerte presión en Europa para que no se reconozca al Gobierno. Existe la posibilidad de que la oposición acuse al Gobierno Petro y al Pacto Histórico de fraude electoral; sin embargo, es poco probable que se nieguen a aceptar el resultado por completo, y es aún más improbable que los actores de la extrema derecha y del Ejército organicen un golpe de Estado, aunque la probabilidad no es inexistente. Si la izquierda obtiene una amplia mayoría, esto proporcionará un mandato claro para la promulgación de una asamblea constituyente o una reforma constitucional integral.

Es más probable que si la izquierda no logra la mayoría en el Congreso, el próximo Gobierno se caracterice por enfrentamientos entre los partidos en el Congreso y entre los poderes del Estado. En este escenario, anticipamos ver una erosión continua de la confianza en las decisiones del poder legislativo e intentos de gobernar por decreto o consulta popular. Es más probable que un presidente de izquierda radical, como Bolívar, continúe las tácticas empleadas por el presidente Petro, que un candidato de centroizquierda como Murillo.

EN CASO DE LA DERROTA DE LA IZQUIERDA

Si gana el centro, existe la posibilidad de que el presidente Petro lo reclame como una victoria propia, buscando apropiarse de su éxito para continuar con su proyecto político, al menos retóricamente. Es más probable que este escenario sea efectivo si el candidato se inclina hacia la izquierda. En caso de una victoria de la derecha, es probable que el presidente Petro recurra a una retórica alarmista, invocando la memoria de la guerra civil y mostrando al país como dividido.

Aunque los miembros del Gobierno y los partidos de la oposición firmaron un [pacto](#) en el que se comprometían a celebrar unas elecciones pacíficas, es cada vez más probable que el presidente Petro cuestione los resultados de las elecciones si pierde su candidato, sobre todo si la derrota es por un margen estrecho. El presidente Petro ha [desacreditado continuamente](#) al CNE, que supervisa las elecciones y valida los resultados. A principios de julio de 2025, el presidente Petro [respondió a la revelación de los supuestos planes de Leyva](#) de un golpe de Estado insinuando que el CNE era cómplice de actos en su contra y cuestionando su capacidad para garantizar las elecciones. Adicionalmente, el mandatario cuestionó el resultado de las elecciones de Ecuador en abril de 2025 tras [la reelección de Noboa](#), y pidió que se publicaran los resultados. La respuesta del presidente Petro al resultado de las elecciones presidenciales de Chile, previstas para noviembre de 2025, servirá como indicio de su enfoque, dado que [se espera que la izquierda chilena pierda las elecciones](#) frente a un candidato de centro-



derecha o derecha. El presidente Petro también tardó en criticar al presidente Maduro por negarse a aceptar los resultados de las elecciones venezolanas de 2024 y por atacar a sus oponentes políticos.

En caso de derrota, es probable que el presidente Petro y sus seguidores provoquen o llamen a la protesta pública y al levantamiento social, recurriendo a la población en busca de apoyo, tal como lo hizo tras la derrota en la consulta popular sobre la reforma laboral. Si un Gobierno de derecha llega al poder, es más probable que estas protestas sean reprimidas mediante la fuerza. También es probable que los miembros del Pacto Histórico intenten perturbar la gobernabilidad, causando conmoción en el Congreso mediante el bloqueo de la legislación. En caso de la derrota de su candidato, especialmente si es por un margen estrecho, existe una pequeña probabilidad de que el presidente Petro acompañe las acusaciones de fraude con la creación de un «Gobierno en la sombra», como [hizo Andrés Manuel López Obrador en México en 2006](#). Tal medida provocaría el clamor de la oposición y, muy probablemente, las críticas de la comunidad internacional por no respetar los principios democráticos de Colombia.

CONCLUSIÓN:

Las elecciones de 2026 en Colombia se perfilan como unas marcadas por la incertidumbre. La contienda electoral está muy reñida, con 75 potenciales candidatos junto con divisiones cada vez mayores dentro de los partidos políticos y movimientos ideológicos. Sin embargo, como ocurre en todas las elecciones presidenciales, las candidaturas se irán consolidando a medida que se acerquen las elecciones, y la mayoría de los candidatos habrán abandonado la contienda antes del 8 de diciembre de 2025. Para entonces, tendremos una idea más clara de los candidatos, sus aliados en el Congreso y sus perspectivas de cara a las consultas entre partidos. Parece sumamente probable que los colombianos no otorguen a ningún candidato la mayoría de los votos en las elecciones primarias del 31 de mayo de 2026 y que, en su lugar, vuelvan a las urnas el 19 de junio de 2026 para elegir al próximo presidente. Se prevé que la campaña esté marcada por la desinformación, disputas legales y un difícil período de transición, lo que complicará aún más el panorama y la gobernabilidad para el próximo mandatario.

La contienda electoral apenas comienza. En las últimas cuatro elecciones presidenciales, el ganador o principal contendiente no figuraba entre los favoritos un año antes de la votación: ni Rodolfo Hernández en 2021, ni Iván Duque en 2017, ni Óscar Iván Zuluaga en 2013, ni Antanas Mockus en 2009. Si la tendencia se repite, es probable que el futuro presidente, o quienquiera que compita en la segunda vuelta, aún no ocupe los primeros puestos en las encuestas. Dada la creciente preocupación del sector privado, la diplomacia y la opinión pública sobre la dirección política del país, recomendamos a los lectores que sigan de cerca la evolución de la contienda durante las tres fechas clave que darán forma a las elecciones: las consultas internas previstas para octubre de 2025, la presentación de las listas al Congreso el 8 de diciembre de 2025 y las elecciones al Congreso junto con las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026. Esta incertidumbre se verá agravada por el hecho de que las encuestas públicas sobre la intención de voto están prohibidas al menos hasta octubre de 2025, lo que aumenta el clima de incertidumbre y alimenta los ciclos de desinformación.

El próximo presidente de Colombia se enfrentará sin duda a varias crisis agravantes, que frustrarán, en gran medida, su capacidad para cumplir las promesas de campaña. Existe una creciente demanda popular para que



se resuelva la crisis de la salud, así como la expectativa de que se apliquen de manera efectiva las reformas laborales y de las pensiones. En particular, el empeoramiento de la situación de seguridad exige una respuesta inmediata. Las respuestas a estas crisis probablemente se verán muy limitadas por el creciente déficit fiscal, que exigirá recortes sustanciales del gasto público. En consecuencia, es probable que el próximo Gobierno se enfrente al descontento social y pierda el apoyo popular. Otro tema importante será la gestión de las relaciones bilaterales con los socios clave. El próximo presidente tendrá que decidir si continuar con el enfoque de «ambigüedad estratégica» del presidente Petro o buscar un realineamiento con Estados Unidos durante la Administración Trump.

Es importante no subestimar el nivel de popularidad que aún tiene el presidente Petro y, por ello, descartar la posibilidad de que un candidato de izquierda gane las próximas elecciones. En este momento de la contienda electoral, la izquierda es el sector político más organizado. La prolongada desorganización y la falta de cohesión en el centro y la derecha, en particular, benefician a la izquierda. En este momento, no se puede descartar una victoria de izquierda, la cual requeriría un análisis más profundo por parte de las partes interesadas para determinar sus implicaciones, en particular, para el sector privado.

Es poco probable que el presidente Petro se niegue a abandonar el cargo. Las instituciones democráticas colombianas han demostrado ser [resistentes y eficaces](#) para controlar los excesos del Ejecutivo y, además, capaces de defender la Constitución, y sigue existiendo un fuerte compromiso social y cultural con la democracia, lo que muy probablemente provocaría un rechazo generalizado de un acto tan autoritario. Además, el presidente Petro carece del apoyo necesario de otras instituciones para mantenerse en el poder, concretamente el Senado y el Ejército Nacional. Es probable que el Ejército defienda el resultado de las elecciones, tal y como le obliga su mandato constitucional. Así, es altamente improbable que se produzca un golpe de Estado.

Independientemente del resultado, es muy probable que la próxima transición del poder en Colombia no sea fluida. Por el contrario, esperamos ver una retórica intensificada, con acusaciones de fraude o interferencia hacia candidatos y partidos y algunos llamados a la movilización popular. Este resultado probablemente provocará críticas extranjeras hacia las elecciones y el sistema electoral colombiano, lo que desacreditará parcialmente la democracia colombiana y su posición en los círculos internacionales. La continua denigración de las instituciones y las autoridades electorales colombianas socava la democracia del país en un momento en el que hay poca inversión internacional en su defensa. Sin embargo, las instituciones democráticas de Colombia son resilientes y su compromiso sociocultural con la democracia es fuerte.

Colombia Risk Analysis espera que este informe proporcione un contexto valioso y un análisis de escenarios que sirvan de referencia para los tomadores de decisiones a medida que avanza la contienda electoral.

